

Génesis de la Guerra de Malvinas (1976-1982)

Valeria Lourdes Carbone
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Presentación del Tema.

En diciembre de 1981, el gobierno argentino desde 1976, el Proceso de Reorganización Nacional (PRN), se encontraba sumergido en una profunda crisis que lo afectaba en todos sus órdenes. Para salir de su propio atolladero, inició un proceso de reestructuración interna que presagió una jugada política ideada para lograr su propia relegitimación y fortalecimiento político: el desembarco argentino en las Islas Malvinas.

La acción llevada a cabo por las Fuerzas Armadas el 2 de abril de 1982 se prefiguró como la estrategia política de un régimen en crisis, cuyo objetivo último era no solo canalizar el descontento social existente hacia un “enemigo” externo, sino ensanchar los márgenes de maniobra para reforzar la política económica vigente y darle una nueva legitimidad a un régimen militar que ya no tenía bases para sustentarse en el poder.

Las condiciones políticas, económicas y sociales en las que se encontraba inmerso el PRN al momento de asumir la tercera Junta Militar a fines de 1981, se constituyeron en las causas mediatas de una iniciativa militar que se esperaba, diera larga vida al régimen en el poder. De esta manera, en el presente trabajo se analizarán dichas condiciones estructurales, así como las estrategias político-militares puestas en práctica por la Junta encabezada por el General Leopoldo Fortunato Galtieri, para tratar de salvar un proyecto de país destinado al fracaso.

Introducción: El PRN y su modelo de país.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas – apoyadas por los sectores ligados al comercio internacional, los bancos, las grandes empresas industriales nacionales y las compañías multinacionales - tomaron el poder

político guiados por la premisa de que la crisis argentina se debía no solo a la acción de la guerrilla, al “desborde” del poder sindical y al peronismo, sino también a la política económica de tipo proteccionista, de industrialización subsidiada y de transferencia de recursos que el Gobierno de Isabel Perón llevaba adelante.

En este contexto, la visión de las Fuerzas Armadas era consecuente con la necesidad de producir un cambio profundo en la sociedad argentina. Para ello, en el llamado *Proceso de Reorganización Nacional* (PRN), la Junta Militar que asumió el gobierno del país luego de la destitución del gobierno peronista (1973-1976), se planteó una serie de objetivos para alcanzar un propósito ulterior: el saneamiento profundo de una República “enferma” y el reestablecimiento de una democracia “estable”¹. Así, los objetivos básicos planteados contemplaban²:

- El reestablecimiento del orden y la seguridad, mediante la erradicación de la *subversión*.³
- La modernización estatal y económica del país.
- El “saneamiento moral” de la República, mediante la lucha contra la corrupción y la especulación, y la reforma del sistema educativo según las normas y valores cristiano-occidentales.

Con estos objetivos en mente, el PRN puso en práctica una serie de políticas destinadas a su concreción. Primeramente, y ya antes del golpe militar, se implementaron desde el Estado prácticas antisubversivas clandestinas – detenciones ilegales, secuestros, aplicación de torturas, desaparición de personas seguidas de muerte – que debían no solo neutralizar sino también exterminar físicamente a los militantes opositores,

¹ Spitta, Arnold. “El proceso de reorganización nacional de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica”. En Peter Waldman y Ernesto Garzón Valdéz (comp.), El poder militar en la Argentina (1976-1981). Buenos Aires. Galerna. 1983.

² Al respecto de los objetivos básicos del PRN ver “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional”. En Troncoso, Oscar. El Proceso de Reorganización Nacional. Cronología y Documentación/1. CEAL. 1984.

³ Se entendía por *subversión* no solo las acciones guerrilleras, sino también “a toda forma de activación popular, todo comportamiento contestatario en escuelas y fábricas, y dentro de la familia, toda expresión no conformista en las artes y la cultura, y, en síntesis, todo cuestionamiento a la autoridad...”. Caracterización extraída de Marcelo Cavarozzi: Autoritarismo y Democracia. 1955-1983. CEAL. 1987. pág. 63.

estuvieran o no relacionados con la lucha armada⁴. Más tarde, a estas prácticas se agregaron medidas tales como la suspensión de toda actividad política y partidaria: se disolvió el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes, se prohibió la actividad política de los partidos y la actividad gremial, y se restringió la libertad de prensa. Para 1978, la Junta Militar consideraba que su primer objetivo estaba logrado y que la guerra contra la subversión estaba ganada.

La modernización del Estado y de la economía quedó a merced de la instauración de una nueva política implementada en 1976 por el Ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Su plan económico introdujo cambios de fondo que buscaron crear las condiciones necesarias para un nuevo modelo de desarrollo que favoreciera principalmente a aquellos sectores que lo apoyaban: los organismos internacionales, los bancos extranjeros y el sector más concentrado del *establishment* económico: el capital financiero⁵.

Según Martínez de Hoz, con su programa se pretendía “...pasar de la economía de la especulación... a la de producción”⁶, y alcanzar tres metas principales: abatir la inflación, superar la crisis del sector externo y de su financiamiento, y lograr la reactivación de la economía para salir de la recesión. Para detener la inflación se adujo la necesidad de reducir el déficit fiscal (implementando políticas de racionalización en la administración pública), atenuar la expansión monetaria y crediticia, e impedir los aumentos salariales. Para superar la crisis de financiamiento externo, se requirió aumentar las exportaciones – principalmente las del sector agropecuario -, estimular el ingreso de capitales eliminando las restricciones a las inversiones extranjeras, y negociar la postergación de los vencimientos inmediatos de la deuda externa. Y finalmente, para reactivar la economía se

⁴ Mignone, Emilio. Derechos Humanos y Sociedad. Edit. CELS. Buenos Aires. 1991.

⁵ Paz, Pedro. “Los Militares en el poder y la nueva política económica”. En Eduardo Jozami, Pedro Paz, Juan Villarreal, Crisis de la Dictadura Argentina. Política Económica y Cambio Social (1973-1986). Siglo XXI Editores. 1985.

⁶ Diario la Prensa. 31 de marzo de 1976.

contemplaba ampliar considerablemente la tasa de ganancia del sector privado y reestructurar los mecanismos de ahorro e inversión.⁷

En primera instancia se llevó a cabo una reforma financiera (1977), que implicó la liberalización de las tasas de interés y la descentralización de los depósitos bancarios. Esto se complementó con la instauración de una pauta cambiaria (1978), que consistió en una tabla de devaluación mensual del peso – gradualmente decreciente hasta llegar en algún momento a cero – rezagada con respecto a las altas tasas de inflación interna. Finalmente, y para atraer inversores y ahorristas, se creó el sistema de “plazo fijo” a altas tasas de interés libre de impuestos, estímulo suficiente para que a partir de entonces entraran al país miles de millones de dólares, atraídos por una economía especulativa que prometía grandes posibilidades de rédito.

Este plan de la dictadura para crear un “nuevo modelo” de país para una “nueva Argentina” terminó entrando en una profunda crisis que afectó a todos sus órdenes (económico, social, político), generalizándose y profundizándose con celeridad. En este punto, y dado que entendemos que para comprender las razones profundas del 2 de abril, es preciso referirnos al desarrollo interno del país en los meses precedentes, a continuación haremos referencia a los diferentes aspectos que adquirió la crítica situación en la que se encontró inmerso el PRN hacia la década de 1980.

Una Argentina en crisis: la situación económica.

A poco de asumir el nuevo gobierno militar, el Fondo Monetario Internacional acordó un postergado giro de alrededor de 100 millones de dólares que permitieron al gobierno solucionar los problemas financieros más urgentes. Similares negociaciones se llevaron a cabo durante el resto del año, tanto con esa institución como con otros representantes de la banca privada internacional⁸. Paso seguido, se procedió a desdoblar el tipo de cambio en dos: uno de tipo comercial, por el que se regían los

⁷ Paz, Pedro. Op. Cit.

⁸ Cisneros, Andrés; Escudé, Carlos. “La Política Económica del Proceso de Reorganización Nacional”. En Historia General de las Relaciones Exteriores de la Argentina. 1806-1989. <http://www.argentina-rree.com/11/11-063.htm>

intercambios con el exterior y cuyo nivel tendía a elevarse y unificarse con el tipo de cambio que regía las transacciones financieras, fijado a un nivel relativamente alto. Por otra parte, el problema del déficit del sector público fue atacado por el lado del congelamiento de los salarios. Tanto la apertura económica como la caída de los ingresos de los asalariados fueron promovidos por la conducción económica para disciplinar al mercado de trabajo y la conducta de la clase trabajadora, y permitir al mismo tiempo la acumulación de capital por parte del sector privado⁹. Con ello se esperaba reactivar la economía y contribuir a la modificación de los precios relativos.

Con estas medidas coyunturales, el programa económico pudo mostrar ciertos resultados positivos durante el primer año de gestión, pero hacia mediados de 1980, el fracaso de la política económica implementada por el Régimen se había hecho evidente. La combinación de apertura y liberalización de los mercados, las facilidades para la especulación financiera, la eliminación de controles, el pedido constante de créditos al exterior, la inexistencia de restricciones para el ingreso o salida de capitales, llevó pronto a todo el sistema a la ruina.

Los primeros perjudicados fueron la industria y el agro. Debido a los exorbitantes costos del crédito y la sobrevaluación del peso - consecuencia directa de la implementación del programa económico - perdieron primero los mercados de exportación y luego se vieron desplazados del mercado interno a manos de importaciones más baratas.¹⁰ En otro plano, la política monetaria había desencadenado una economía “especulativa” que, ante los primeros síntomas de crisis, derivó en una masiva fuga de los capitales atraídos desde 1977 por el sistema de plazo fijo a altas tasas de interés.

⁹ Mesyngier, Luis. La política implícita. Instrumentos económicos y transformación social en la última dictadura. Eudeba. Buenos Aires. 1998.

¹⁰ “... la burguesía agraria, que en una primera etapa fue beneficiada, pronto vio desaparecer sus ventajas relativas, como consecuencia de la política monetaria del régimen.”. De Riz, Liliana. “Argentina: ni democracia estable ni régimen militar. Conjeturas sobre las perspectivas para la democracia”. En Oscar Oszlak, Proceso: crisis y transición democrática/2. CEAL. 1984. Pág. 15. Y “Las continuas quejas de los industriales no monopólicos denunciaron durante todo el proceso la recesión y advirtieron repetidamente sobre el persistente crecimiento de los quebrantos y sobre el aumento de la capacidad ociosa. Los indicadores económicos revelaban la continua caída de la demanda por productos nacionales...(por las) limitaciones en el financiamiento debido a lo caro del dinero...y la competencia de los productos importados que llegaron al país...favorecidos por un tipo de cambio muy sobrevaluado y por la apertura exterior con desgravación arancelaria.” Paz, Pedro. Op. Cit. Pág. 104-105.

Ahora bien, ¿cuáles fueron esos síntomas?. El primero fue la liquidación, en marzo de 1980, del banco privado más importante del país: el Banco Interamericano Regional (BIR). Ello desató una corrida que acabó con otras tres importantes instituciones bancarias (Oddone, de los Andes e Internacional), lo que terminó afectando al sistema financiero en su conjunto. A lo largo ese año, el Banco Central debió asumir el control de otras 60 instituciones financieras al borde de la quiebra, obligándolo a desprenderse de una buena parte de las reservas acumuladas.¹¹

Lo cierto era que, en cuatro años, la economía prácticamente no había crecido y la inflación seguía siendo un problema sin solución, y al que tampoco se la buscaban, ya que – como afirma Jorge Schvarzer – “*se trataba de un coste aceptable y necesario para la aplicación plena de la reforma financiera*”.¹² De esta manera, la política económica puesta en práctica no fue otra cosa que “*una política que institucionalizó la inflación*”¹³, que en combinación con una economía especulativa libre y un sistema de elevadas tasas de interés, condujo al sistema productivo a ingresar en un proceso recesivo de difícil retorno.

En el mes de julio de 1980 se anunció una nueva profundización del plan económico, que incluyó medidas para reducir el déficit público y el levantamiento de las últimas trabas que quedaban para tomar créditos en el exterior; lo que solo contribuyó a aumentar el endeudamiento y ahondar la crisis en un sistema de por sí inestable. Para marzo del año siguiente, los problemas económicos más urgentes eran el atraso cambiario, la “sangría” exterior – provocada no solo por el déficit comercial sino también por la fuga de capitales -, la enorme deuda externa y la recesión productiva. A esto había que sumarle el déficit fiscal y la inflación, ambos increíblemente altos, cuya eliminación era prácticamente imposible. Fue en este contexto que el 24 de marzo de 1981, el General Roberto Viola se hizo cargo de la presidencia de la República y desplazó a Martínez de Hoz de un cargo que

¹¹ Gerchunoff, Pablo; Llach, Lucas. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Ariel. 1998.

¹² Schvarzer, Jorge. La política económica de Martínez de Hoz. Hyspamérica. 1986. Pág. 66.

¹³ Paz, Pedro. Op. Cit. Pág. 94.

había ejercido ininterrumpidamente por 5 largos años. En su lugar, nombró a Lorenzo Sigaut, y entre ambos, intentaron un cambio en la orientación político-económica del PRN.

Por un lado, se procedió a una especie de “desmilitarización” del Gabinete, mediante el nombramiento de siete ministros civiles¹⁴, y se realizó un franco intento de apertura política hacia los representantes partidarios de la sociedad: se anunció una nueva ronda del diálogo político y la pronta elaboración del Estatuto de los Partidos. Y por otro, se decidió intentar una reorientación económica: se abandonó la pauta cambiaria – lo que solo sirvió para crear mayor incertidumbre y dudas – y hubo varias devaluaciones (que alcanzaron el 400 por ciento). Esto condujo a una “avalancha sobre el mercado de divisas” caracterizada por la deserción de ahorristas, la compra masiva de divisas y la evaporación de las reservas¹⁵. Para hacer frente a esta situación, el equipo económico no solo debió recurrir nuevamente a las reservas del Banco Central para satisfacer la creciente demanda de dinero y subsidiar bancos y firmas financieras quebradas o en crisis, sino que debió tomar nuevos créditos del exterior, que solo contribuyeron a acrecentar una ya impresionante deuda externa¹⁶. Y poco después (abril de 1981), Sigaut tomó una medida que fue muy mal recibida por el *establishment económico*: abrió una línea de crédito de 3800 millones de dólares destinados a que las empresas endeudadas pudieran convertir las deudas de corto plazo en otras de largo plazo¹⁷.

La fuerte recesión, la inflación creciente, la caída de los salarios reales, un desempleo en ascenso y la existencia de una deuda externa que cada vez se hacía mas inmanejable, sumado a los reveses que el *establishment* sufría como consecuencia de la nueva política económica, pusieron de

¹⁴ Además de a Sigaut (Economía), se designó a Jorge Aguado en Agricultura y Ganadería, a Eduardo Oxenford en Industria y Minería, a Carlos García Martínez en Comercio e Intereses Marítimos, a Oscar Camilión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a Amadeo Frugoli en Justicia, y a Carlos Burundarena en Cultura y Educación.

¹⁵ Schvarzer. Op. Cit.

¹⁶ Según Enrique Vázquez, en el curso de 1980 el Banco Central vendió a las casas de cambio aproximadamente 4.124 millones de dólares; y para afrontar los constantes retiros de capitales y fuga de divisas, los créditos tomados del exterior ascendieron a los casi 6.500 millones de dólares desde el 1 de abril de 1981 hasta el 31 de diciembre de ese año. Vázquez, Enrique. *PRN. La última. Origen, Apogeo y Caída de la Dictadura Militar*. Eudeba. 1985.

¹⁷ Seoane, María; Muleiro, Vicente. *El dictador. La Historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*. Editorial Sudamericana. Editorial Piados. 2003.

manifiesto la necesidad de realizar “ajustes” en el área. Pero no precisamente en el rumbo que había tomado Viola. Su “peligrosa” reorientación condujo a un nuevo cambio en la cúpula militar. Sus iniciativas para cambiar el rumbo económico e iniciar un acercamiento a los sectores políticos, solo llevaron a que la Junta de Comandantes y otros jefes militares expresaran su oposición, haciendo cada vez más palpable su deseo y disposición a desplazarlo del gobierno.

La crisis político-institucional del Gobierno de Viola.

Ante la crisis económica y las cada vez más evidentes fracturas en el seno de las Fuerzas Armadas debido a la nueva orientación que el PRN había tomado con Viola en el Ejecutivo, los “duros” del poder militar y el capital financiero – el sector que más se había beneficiado con las políticas de Martínez de Hoz –, comenzaron a sentirse cada vez más aislados del poder. De alguna manera, contribuyeron a este aislamiento el anuncio de la “derrota de la subversión”, que convertía a la presencia militar directa en el Estado en un sin sentido, la falta de concreción en el prometido diálogo con los partidos¹⁸, y la debacle económica.

El primer indicio de que el poder político que ostentaban comenzaba a deteriorarse, provino de una serie de protestas de productores regionales y cámaras de la producción y el comercio (“apagones” de vidrieras, paros y manifestaciones promovidas por grupos empresarios)¹⁹, y por la presencia siempre latente y cada vez más manifiesta de la protesta obrera. Pero uno de los síntomas más evidentes de la crisis política que se avecinaba fue el surgimiento en julio de 1981 de la llamada *Alianza Multipartidaria*. Convocada por el presidente del radicalismo - Ricardo Balbín – e integrada por la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Justicialista (PJ), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente, se constituyó como un frente opositor a la dictadura.

¹⁸ Yannuzzi, María de los Angeles. Política y Dictadura: los partidos políticos y el Proceso de Reorganización Nacional. 1976-1982. Editorial Fundación Ross. Rosario. 1996.

¹⁹ Dabat, Alejandro. Cuestión Malvinas y Crisis Nacional. Teoría Política. 1982.

La *Multipartidaria* se había visto impulsada por la apertura al diálogo político de la nueva Junta y, desde una posición “opositora-negociadora”, aunó reclamos económicos con reivindicaciones políticas. Si bien en un principio esta organización “...no tenía mayor vitalidad que la escasa de los partidos que la integraban”²⁰, se comprometió a no colaborar con el régimen en una salida electoral condicionada ni a aceptar una democracia subordinada a la tutela militar, pero cuidándose siempre de dejar abierta la posibilidad de negociar una salida concertada. Progresivamente, su postura devino abiertamente opositora, y se autoproclamaron como los únicos depositarios de la legitimidad política, y única “expresión del estado de angustia que sufre el pueblo argentino ante la crisis”²¹.

A esta abierta muestra de oposición al gobierno se agregaba la disconformidad de ciertos sectores políticamente relevantes para el PRN, como la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina - representantes ambas de sectores seriamente afectados por la crisis económica -, y el distanciamiento de la Iglesia Católica. Esta última, tolerante y complaciente hasta el momento con el régimen, elaboró en mayo de 1981 un documento (“Iglesia y Comunidad Nacional”) en el que la Conferencia Episcopal Argentina criticaba los excesos de la represión y las graves consecuencias de la política económica²².

Sumado a esto, se iba poniendo de manifiesto que la sociedad ya no aceptaba indiscutiblemente el argumento oficial sobre los detenidos-desaparecidos y la necesidad de poner fin a la violencia subversiva. Y ante la disminución de la censura durante la administración Viola, la prensa comenzó a señalar este tipo de temas, hasta entonces omitidos. Así, el debate público ya instaurado por las “Madres de Plaza de Mayo”, adquirió

²⁰ Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina. Fondo de Cultura Económica. 2001. Pág. 228.

²¹ Extracto del Prólogo de la Junta Política Multipartidaria Nacional. Febrero 1982. en Yannuzzi, Maria de los Angeles. Op. Cit. Pág. 434.

²² El Documento sostenía que “la Argentina sufre una crisis de autoridad, crisis de estado, del derecho y de la economía (...) no hay voluntad de someterse al imperio de la ley (...) porque se ha desarraigado la autoridad de su origen último que es Dios (...) la represión ilegítima también enlutó a la patria (...) No es confiando en que el tiempo trae el olvido y el remedio de los males como podemos pensar y realizar ya el destino y el futuro de nuestra patria.” En Novaro, Marcos; Palermo, Vicente. La dictadura militar. 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática. Editorial Piados. 2003.

cada vez mayor resonancia, viéndose crecientemente fortalecido desde el exterior por la prensa, los gobiernos y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que cuestionaban a la dictadura militar y denunciaban la violación de derechos humanos en el país²³.

Pero la crisis política existente se reflejó principalmente al interior de la misma corporación militar, adoptando la forma de desacuerdos y disensiones entre los miembros de la Junta. La falta de acuerdo giraba principalmente en torno al plan político que el Proceso debía aplicar en el futuro. Estaban quienes pretendían darle al régimen una duración prolongada, planteando una transición paulatina y controlada recién avanzada la década del '80, para arribar a una democracia limitada y vigilada con componentes corporativos y elitistas – los “duros” - ; y quienes proponían un breve período de ordenamiento, seguido por una progresiva pero más o menos rápida transferencia del poder sobre la base de acuerdos programáticos con los civiles: los “blandos”, entre los cuales se destacaba el Gral. Roberto Viola²⁴.

Con él en la presidencia, las tensiones y fricciones que estas concepciones diversas encerraban comenzaron a manifestarse en la cúpula misma del poder militar, entre el Poder Ejecutivo – compuesto por Viola y los “blandos” de su Gabinete – y los “duros” de la Junta de Comandantes - nucleados en torno al General del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri -. Los “duros” rechazaban cualquier contacto con los políticos y los planes para incluirlos en el gobierno, por lo que las muestras de apertura política y la convocatoria a conversaciones con los partidos, sumado al cambio de rumbo en materia económica, no fueron en absoluto bien recibidos por este sector.

El aislamiento de Viola dentro del gobierno se fue haciendo cada vez más notorio, y se evidenció cuando en agosto de 1981, el Consejo de Almirantes – alejándose expresamente de las orientaciones presidenciales -

²³ La presión internacional jugó un rol muy importante. Misiones como la de Patricia Dorian, enviada por el Gobierno de Estados Unidos, o la labor de denuncia desarrollada por organizaciones como *Amnesty International* contribuyeron a poner la cuestión de los detenidos-desaparecidos sobre el tapete, y apoyaron a los grupos de derechos humanos, en situación de marginalidad durante todo el período. En 1979, el gobierno argentino debió aceptar la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que luego, en su informe final de abril de 1980, condenó al gobierno militar.

²⁴ Novaro, Marcos; Palermo, Vicente. Op. Cit.

ratificó la vigencia de los postulados establecidos en marzo de 1976 y dio a conocer las “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reunificación Nacional” (19/12/1979), con lo que de alguna manera, planteaban un retorno a las fuentes del Proceso, tal como este había sido instaurado. Dado el contexto propicio, Galtieri buscó establecer alianzas con oficiales de la Armada cercanos al Almirante Jorge Isaac Anaya con el objetivo de socavar sistemáticamente el poder de Viola hasta finalmente desplazarlo del gobierno. Rápidamente, la oposición a la figura de este último se hizo más y más notoria, fragmentando y dificultando enormemente el proceso de toma de decisiones al interior de la cúpula militar.²⁵

El “fantasma” de un golpe militar reapareció, pero esta vez, al interior del gobierno. Junto a los mal vistos intentos de Viola de “desviarse” de las bases del PRN, la crisis económica y los cuestionamientos de sectores políticamente relevantes para el gobierno, se sumaba el aumento constante del descontento social – que repudiaba a una dictadura que solo causaba estragos económicos – y la creciente resistencia de los sectores populares, sobre todo del movimiento obrero.

La crisis social.

La crisis económica no solo había conducido a un franco debilitamiento del poder político, sino a un fuerte desengaño en amplios sectores de la sociedad. A pesar del contexto represivo y de las medidas adoptadas para desmovilizar definitivamente a los sectores populares, desde 1976 continuó habiendo muestras ininterrumpidas de resistencia y oposición al PRN y sus políticas.

Las muestras más persistentes provinieron del movimiento obrero. Sin dejarse amedrentar por las leyes y decretos del Poder Ejecutivo y la ofensiva represiva contra los grupos más militantes que buscaban poner fin

²⁵ Russell, Roberto. “Marchas y Contramarchas de la política exterior del proceso: los gobiernos de Viola, Galtieri y Bignone (1981-1983)”. En Jalebe, Silvia Ruth (comp.), La política exterior argentina y sus protagonistas (1880-1995). CARI/GEL. Colección Estudios Internacionales. 1996.

a la movilización obrera y lograr una efectiva fragmentación de la clase trabajadora, esta continuó adoptando diferentes y múltiples medidas de fuerza y ampliando sus métodos de lucha y organización, en forma acorde con la represión desatada y la falta de organización legal.²⁶ Se trató de medidas “defensivas y reivindicativas” de las conquistas obtenidas, con un profundo significado político que, en última instancia demostraron, como sostiene Pablo Pozzi, que *“el PRN había fracasado en su intento de resolver la “crisis orgánica” del capitalismo argentino”*.²⁷

Mismo durante el año 1976, el Régimen debió enfrentar importantes huelgas – muchas de ellas brutalmente reprimidas con desapariciones, detenciones, asesinatos y la ocupación de fábricas por parte de las Fuerzas Armadas – en los sectores automotor, metalúrgico, portuario, electricista, telefónico, entre otros. Por lo general, las causas principales de la adopción de estas medidas fueron el despido y/o secuestro de compañeros de trabajo, el empeoramiento de las condiciones laborales, o el incumplimiento de las condiciones colectivas de trabajo. Durante los dos años subsiguientes, hubo protestas “sorpresivas”, restringidas a los lugares de trabajo y de escasa duración. Por lo general, se caracterizaron por adoptar diferentes y creativas medidas de fuerza (paros, quites de colaboración - trabajo a desgano, trabajo “a tristeza” o “a reglamento”, abandono de tareas - , y sabotajes), por organizarse en la clandestinidad y al margen de los organismos sindicales tradicionales (gremios, cuerpos de delegados) y por su cada vez mayor dureza.²⁸

Hacia 1978, la marea de conflictos y medidas de fuerza aumentó notablemente. Según los autores consultados, se calcula en 4000 los

²⁶ Pozzi, Pablo. Oposición obrera a la dictadura. Editorial Contrapunto. Colección Memoria y Presente. 1987. Esta afirmación se contrapone con la postura sostenida por autores como Francisco Delich (“Desmovilización Social, reestructuración obrera y cambio social”. En Peter Waldman y Ernesto Garzón Valdez (comp.) Op. Cit.) y Alvaro Abos (Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983). Centro Editor de América Latina (CEAL) Buenos Aires. 1984.), quienes sostienen la hipótesis de un cierto “inmovilismo” de la clase obrera durante el Proceso, consecuencia directa de la ofensiva represiva del régimen, que condujo a la ausencia de conflictos sociales y políticos durante el período.

²⁷ Pozzi, Pablo. Op. Cit. Pág. 32-33.

²⁸ Schneider, Alejandro. “Ladran Sancho... Dictadura y Clase Obrera en la zona Norte del Gran Buenos Aires”. En Camarero, Hernán; Pozzi, Pablo; Schneider, Alejandro. De la Revolución Libertadora al Menemismo. Historia Social y Política Argentina. Imago Mundi. 2000.

conflictos a través del año, 1300 de ellos confirmados por la revista empresarial “Mercado”. En 1979, el nivel de conflictividad social alcanzado logró que se efectuara el primer hecho aglutinador del movimiento obrero contra la dictadura militar: la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril. Convocada por sectores de la burocracia sindical conocida como “los 25”²⁹, canalizó la protesta que la clase trabajadora realizaba a diario contra los empresarios y el régimen militar. Si bien el gobierno pretendió brindar la imagen de que la medida había sido un fracaso, lo cierto es que tuvo la capacidad de alterar sustancialmente la normalidad de los principales centros industriales³⁰

A lo largo de 1980, las protestas del movimiento obrero se agudizaron. La política económica había conducido indefectiblemente al cierre de numerosos establecimientos fabriles³¹, y las medidas de protesta en defensa de la fuente de trabajo, por cuestiones salariales y por el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y de trabajo, aumentaron notablemente. Un hecho significativo que se produjo en este marco, sobre todo dadas las condiciones prescriptivas al respecto, fue la recomposición de la disuelta CGT, cuyo secretario general pasó a ser el Cervecerero Saúl Ubaldini.

²⁹ “La Comisión de los 25” eran un sector de la burocracia sindical encabezado por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini y por el Papelero Donaires, que trató de mantenerse fiel a los cánones propios anteriores a marzo de 1976. Otros sectores eran “los 20” – entre los que se contaba al dirigente del gremio de Aguas Gaseosas (Rachini), de los Fideos (Barrionuevo) y de Alimentación (Soberano); y la Comisión Nacional de Trabajo (CNT), verdadero intento de generar un sindicalismo “oficialista” que pusiera tras de sí a un movimiento obrero dispuesto a aceptar la conducción política de las Fuerzas Armadas. (Yannuzzi, Ma. De los Angeles. Op. Cit.)

³⁰ Fábricas enteras adhirieron a la medida y paralizaron sus tareas: Celulosa Argentina, Chrysler, Santa Rosa, Mercedes Benz, Aguila Saint, Peugeot, Citroen, la Cantábrica, centenares de plantas y talleres de Avellaneda, Lanús, La Matanza, Morón, Campana, Zárate, Ensenada, Berisso, Córdoba, Rosario, Santa Fe; además de la adhesión de tres líneas de ferrocarriles nacionales (Roca, Sarmiento, Mitre). En Abos, Alvaro. Ob. Cit.

³¹ Antonio Balcedo denunció desde las páginas de los diarios “El Día” de La Plata y el “Diario Popular” de Buenos Aires, la dramática situación que esto generaba. En un artículo publicado el 4 de febrero de 1980, y tomando a la localidad de Brandsen como “caso paradigmático” del alto coste social que el país estaba pagando por la instrumentación de la política económica, pintó el siguiente cuadro de situación:

“Cónsul Metalúrgica es una fábrica de cubiertos que hace 25 años funciona en Brandsen, llegando a dar trabajo a un centenar de personas y ahora cerró. Meatex, en Alejandro Korn, es un frigorífico modelo con carnes de importación, y que dio trabajo a 500 trabajadores, cerró. Curtiembres Avellaneda, sobre el camino a Ranchos, hace 5 meses cerró provisoriamente (...) Emoca, en Jeppener, que trabajó para la Citroen, tiene una paralización casi de cierre. Esta fábrica llegó a tener 1200 trabajadores, pero al cerrar el 26 de diciembre Citroen Buenos Aires, se hicieron repuestos ese mes y en el de enero, en febrero se dieron vacaciones y para marzo no se sabe (...) ¿Quién desde el gobierno no entiende que esto está sucediendo en Brandsen?”

En Balcedo, Antonio. Miedos, Broncas y Esperanzas. Mirando el país desde el sindicalismo (1979-1993). Editorial Corregidor. 2000.

Llegado el año 1981, las medidas de fuerza se acentuaron: huelgas, ocupaciones de fábricas, movilizaciones y manifestaciones por despidos y bajos salarios, dos paros nacionales de SMATA y una jornada nacional de protesta el 22 de julio, convocada por la CGT en reclamo por “la recuperación del aparato productivo y los niveles de salario y la plena vigencia del Estado de Derecho”. El resultado de la convocatoria fue ilustrativo de la situación que atravesaba el gobierno: manifestaciones en Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Tucumán, Córdoba, y Mar del Plata.³² La misma CGT organizó la marcha de “*Pan, Paz y Trabajo*” a la Iglesia de San Cayetano, realizada el 7 de noviembre de ese año, que contó con el apoyo de algunos partidos políticos – el PJ, la Democracia Cristiana, los Intransigentes, el Partido Comunista y el Partido Socialista - y la asistencia de más de 50.000 personas, que corearon consignas contra el proceso y en reclamo por los desaparecidos.³³ Lo cierto es que la situación socioeconómica siguió deteriorándose, clímax de la cual sería la marcha del día 30 de marzo de 1982, que trataremos más adelante.

A fines de 1981, la situación social era ya insostenible. La quiebra de una innumerable cantidad de empresas industriales y financieras había llevado a que los niveles de desempleo se dispararan. La desocupación afectaba a 200.000 trabajadores en el Gran Buenos Aires, más de 12.000 trabajadores de Mercedes Benz, Volkswagen y Ford se encontraban suspendidos de sus tareas, y la fábrica Sevel se había visto forzada a adoptar la misma decisión en relación al 75 por ciento de su personal de Córdoba; 10.000 obreros del sector papelerero estaban sin trabajo, y en San Juan, el Ministerio de Trabajo anunciaba que el número de desocupados

³² Sobre la convocatoria del 22 de julio ver Abos (Ob. Cit.), Dabat (Ob. Cit), Pozzi (Op. Cit.).

³³ “... los hombres y mujeres que rebasaron las calles en esa marcha por el “*Pan, Paz y Trabajo*” gritaron también su odio hacia los militares, proclamaron su anhelo por alcanzar un futuro digno para ellos y para sus hijos, reivindicaron a sus presos políticos, exigieron la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos y ratificaron su confianza en la fuerza transformadora del pueblo argentino (...) su consigna “se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar” marca su reafirmada determinación (...) Cuando hay tal cantidad de desocupados, cuando hay perspectivas de que la desocupación siga aumentando, cuando hay gente que trabaja en turnos tres veces por semana no son precisamente estas las mejores condiciones para que las movilizaciones sean realmente masivas. En este sentido, creo que tiene gran valor la del 7 de noviembre, porque pese a todas estas condiciones desfavorables se calcula que participaron cerca de 50.000 trabajadores...”. En Revista Denuncia, enero-febrero de 1982. Suplemento Especial. En Carballo, Liliana; Charlier, Noemí; Garulli, Liliana. La dictadura (1976-1983). Testimonios y Documentos. Eudeba. 1996.

absolutos alcanzaba al 20 por ciento de la población activa.³⁴ Ante esta situación, la CGT emitió un comunicado en el que proclamaba *“el fracaso total y absoluto de la pretendida gestión gubernamental del llamado Proceso”* y proponía *“una movilización popular para acelerar el llamado a elecciones .(ya que) de nada valen los cambios de persona pues lo que el país reclama es una revisión profunda de la filosofía actual”*.³⁵

Expresión esta de un sentimiento popular y generalizado, mismo entre los militares se consideraba que el Proceso había fallado en concretar su proyecto de país. En octubre de 1981, el Almirante Massera – miembro de la Junta Militar entre 1976 y 1978 – se vio forzado a admitir que *“... a más de 5 años de haber dado comienzo a lo que iba a ser una etapa importante de la historia, ...no hemos alcanzado ninguno de los objetivos, excepto la victoria armada contra el terrorismo... Mientras millones de ciudadanos eran llevados a la pobreza, selectos grupos de elegidos aumentaban sus riquezas sin el menor pudor, sobre la base de la especulación y a costa de destruir el aparato productivo... no creo que haya un solo argentino que no lo sepa... es un precio muy alto pagado por las mujeres y los hombres de esta tierra, como para que ahora nos conformemos diciendo que se hizo un experimento y el experimento falló. Y falló... la ciudadanía está convencida de que falló.”*³⁶ Pero a diferencia de la sociedad en su conjunto, para los militares la solución a la crisis existente se encontraba, no en un cambio de dirección o en la composición del poder, sino justamente en un “cambio de persona” que no solo representase un retorno a las fuentes mismas del PRN para poder alcanzar los objetivos incumplidos, sino que revitalizase su existencia misma.

Entra Galtieri, sale Viola.

³⁴ Poce, Julio. Historia no Oficial de la dictadura del Proceso. Sus antecedentes y consecuencias. Grafikar. La Plata. 2002.

³⁵ Cito en Abos, Alvaro. Ob. Cit. Pág. 81.

³⁶ Cito en Spitta, Arnold. Op, Cit. Pág. 77.

Fue en este difícil contexto nacional en el que el sector “duro” de las Fuerzas Armadas comenzó a planear la destitución del General Viola del gobierno. Y la situación se presentó propicia a principios del mes de diciembre de 1981 cuando Viola debió ser hospitalizado como consecuencia de una hipertensión arterial. Si bien 48 horas después dejó el establecimiento, nunca reasumió la presidencia. El gobierno provisorio fue asumido por el General Tomás Liendo (Ministro del Interior), quien adoptó medidas que pusieron de manifiesto hasta que punto el gabinete de Viola estaba decidido a modificar la orientación político-económica del régimen.

Durante su breve mandato como presidente interino (21/11/81 – 11/12/81) Liendo introdujo la regulación de los mercados cambiarios y financiero, mediante una reforma que significaba una ruptura política con el capital financiero; permitió una mayor liberalización de los medios de difusión y decidió que el tratamiento de los problemas económicos se llevara a cabo a través de un “gabinete económico social” compuesto por los 5 ministros del área económica y los ministros de acción social y de trabajo.³⁷ Sin embargo, esto duró poco ya que, ante *“la situación de acefalía en que desembocó el PRN a partir de la enfermedad del Tnte. Gral. Roberto Viola...”* y debido al *“...desgaste... experimentado (por) el Proceso desde la última etapa del Tnte. Gral. Jorge Rafael Videla...”*³⁸, sus propios camaradas de armas resolvieron remover a Viola de su cargo.³⁹

Luego del interinato del Almirante Carlos Lacoste (11/12/81 – 22/12/81), el 22 de diciembre de 1981, en una atmósfera de generalizada pérdida de consenso, apatía y falta de expectativas de parte de la ciudadanía argentina⁴⁰, el General del Ejército Leopoldo F. Galtieri asumió la presidencia de la tercera Junta Militar. Inmediatamente declaró que si bien *“el apoyo de la ciudadanía, sustento insoslayable para la tarea emprendida, no sería posible de lograr únicamente por haber triunfado en la guerra que*

³⁷ Fontana, A. Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina. Estudios Cedes. 1984. Pág. 22.

³⁸ Diario La Nación 5 de diciembre de 1981. Pág. 7.

³⁹ Poco después del cese en sus funciones determinado por la Junta, Viola expresó públicamente: *“Yo no renuncié a la Presidencia de la Nación por razones de salud. Está perfectamente claro que yo fui removido”*. Ídem. Pág. 1.

⁴⁰ Calificativos utilizados por el Diario La Nación del 23 de diciembre de 1981 para describir el marco social en el que se produjo la asunción de Galtieri al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

*se libró contra la subversión marxista... entiéndase que no luchamos y morimos para, un buen día, dar por concluida la gesta de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales de regresar a nuestros cuarteles y bases sin haber alcanzado los objetivos básicos fijados en los documentos liminares que orientan el PRN".*⁴¹

Fue por ello mismo que el nuevo presidente pretendió recomponer la imagen de la autoridad militar y recuperar la iniciativa política que se había perdido debido a las confrontaciones al interior de la cúpula de poder. La primera medida consistió en realizar importantes modificaciones en el proceso de toma de decisiones. El estatuto que regía las relaciones entre la Junta Militar y el Presidente por ella designado establecía expresamente que este último no podía ser un militar en actividad. Así, Galtieri debería haber renunciado a la Comandancia en Jefe del Ejército y pasar a situación de retiro. Pero la misma Junta – ahora integrada por Galtieri, el Almirante Jorge Anaya y el Brigadier General de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo – decidió violar ese principio al nombrarlo Presidente y mantenerlo como Comandante en Jefe en sus funciones. Lo que se buscaba era asegurar por este medio la “unidad monolítica” entre el Presidente y el Ejército, y evitar las contradicciones que entre ambos niveles se habían venido suscitando.⁴²

Con respaldo político militar asegurado por este mecanismo, Galtieri buscó establecer nuevas bases de legitimidad y consenso para el desgastado PRN. Para él, la forma de hacerlo era retornar a las “fuentes” del Proceso. Para ello, y en un signo de que el rumbo económico tomado durante el Gobierno de Viola no había sido bien recibido, se nombró a un Ministro de Economía que retornó al camino marcado por Martínez de Hoz: el Dr. Roberto Alemann. Alemann puso en práctica un programa antiinflacionario de tipo ortodoxo, inspirado en tres principios definidos por la negativa: desinflación, desregulación y desestatización de la economía⁴³, que resultó muy duro en términos fiscales y salariales. El plan abarcaba una

⁴¹ Galtieri. Clarín 24 de diciembre de 1981. Cit. En Novaro, Palermo. Op. Cit. Pág. 399.

⁴² Fontana, A. Ob. Cit.

⁴³ Detalles del Plan de Alemann aparecieron en el diario La Nación de los días 27 de diciembre de 1981, Sección Económica, y 8 de enero de 1982.

reforma administrativa – que comprendía la racionalización de organismos del estado, la supresión de otros, y la anulación de fondos y cuentas especiales de los restantes - , un riguroso plan de privatización de empresas y sociedades del estado, el congelamiento de salarios y el aumento de impuestos.

Otra medida adoptada giró en torno a un hecho “reivindicativo” que desde el punto de vista de la Junta, generaría el tipo de apoyo unánime e inmediato que el régimen necesitaba: la recuperación de las Islas Malvinas. Una acción militar de este calibre no solo le otorgaría al régimen el consenso social que por aquella época había perdido y otorgarle un cierto margen de maniobra para relegitimar su plan de gobierno, sino que además, como afirman Carlos Acuña y Catalina Smulovitz, tenía un atractivo extra: permitiría, de alguna manera, contrarrestar las consecuencias de un fallo papal adverso en la cuestión pendiente sobre el Canal del Beagle.⁴⁴ Desde 1971, se encontraba sometida a arbitraje la posesión de este Canal que separa a Argentina de territorio chileno. En 1977, un laudo arbitral resultó favorable a Chile, pero tan pronto como el gobierno de Videla recibió la sentencia, la rechazó y declaró su nulidad. Por su parte, el gobierno chileno emitió un comunicado en el que señalaba no estar dispuesto a reiniciar discusiones sobre un área que ahora consideraba legítimamente propia. Esto volvió a endurecer las relaciones entre ambos países, a punto tal de llegarse a las puertas de una resolución bélica de la cuestión.⁴⁵ Los gobiernos argentino y chileno decidieron aceptar la mediación del Papa, quien a fines de 1980 mantuvo lo establecido en el laudo arbitral de 1977. Chile aceptó la decisión, pero el gobierno argentino, al haber aceptado la

⁴⁴ Acuña, Carlos; Smulovitz, Catalina. “Ajustando las Fuerzas Armadas a la democracia. Las Fuerzas Armadas como actor político en la experiencia del Cono Sur”. *Agora* N° 5. Invierno de 1996.

⁴⁵ “...Argentina y Chile actuaban como dos naciones al borde de la guerra: desplazaban tropas de combate hacia las fronteras, ponían en alerta a los reservistas y aumentaban sus compras de armamentos. A uno y otro lado de la cordillera se levantaban voces rechazando de plano toda posibilidad de negociar la soberanía (...) De manera peligrosa, se abría el paso a otra instancia política bilateral: el uso de las armas (...) La... “operación soberanía” se llevaría a cabo el día 21 o 22 de diciembre. Aparentemente, los planes militares apuntaban a ocupar dos islas – la Nueva y la de Hornos – esperar la reacción chilena y actuar en consecuencia (...) la opción bélica defendida por los halcones argentinos no era un mero “bluff” destinado a amedrentar a los chilenos”. En Russell, Roberto. “El Proceso de toma de decisiones en la política exterior argentina. (1976-1989). En Russell, Roberto. *La política exterior y toma de decisiones en América Latina*. GEL. Buenos Aires. 1990. Pág. 49-51.

mediación se encontró imposibilitado tanto de aceptarla como de rechazarla abiertamente, por lo que optó por dilatar una respuesta. Ante esta “derrota”, y para evitar la pérdida de presencia en el Atlántico Sur y una potencial colaboración entre Chile y Gran Bretaña, en 1982 el Gobierno Argentino creyó necesario reactivar las negociaciones con esta última sobre las Islas Malvinas– estancadas desde 1965 – y alcanzar de una vez y para siempre algún tipo de acuerdo.⁴⁶

La nueva cúpula de poder no solo consideró que la crítica situación interna existente requería una medida de este tipo, sino que la coyuntura internacional parecía propicia para ello. La posición política internacional de la Junta giraba alrededor de su alineamiento y alianza con Estados Unidos, en cuanto a la perspectiva de cumplir un papel protagónico en Centro y Sudamérica. La Administración Reagan (1980-1988) vio positivamente la decidida participación “contrainsurgente” que los militares argentinos venían desempeñando desde tiempo atrás en América Central. Los frutos de esta intervención fueron inmediatos: Reagan había dejado de lado la política de derechos humanos característica del gobierno demócrata precedente de Jimmy Carter (1976-1980), y destrabó el embargo de armas que pesaba sobre el país. Esta cooperación con Estados Unidos - en la cual Argentina cumplía tareas de asesoramiento y operaciones encubiertas - se caracterizó por la preocupación de contener el avance de “elementos izquierdistas”, y respondió al perfil occidentalista y anticomunista que el Gobierno Argentino quería proyectar a nivel internacional.⁴⁷

Estas relaciones de “colaboración” entre Argentina y Estados Unidos contribuyeron a dar forma a la determinación de la Junta de emprender una operación militar en el Atlántico Sur. Sin embargo, debemos adelantar que – como más tarde se haría evidente – los militares argentinos percibieron erróneamente la importancia que tenía el país como “socio” de Washington en el continente americano. Es decir, guiados por el desempeño del

⁴⁶ Freedman, Lawrence; Gamba-Stonehouse, Virginia. Señales de Guerra: el conflicto de las Islas Malvinas de 1982. Buenos Aires. Javier Vergara. 1992.

⁴⁷ Armony, Ariel. Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central. (1977-1984). Universidad de Quilmes. 1999.

“importante rol estratégico” de Argentina en Centroamérica (intervención de asesores militares argentinos en Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua) y en Sudamérica (intervención en el golpe militar boliviano de 1980 y su activa participación en el “Plan Cóndor” con Chile, Uruguay y Brasil⁴⁸), los miembros de la Junta creyeron que, ante una eventual acción argentina en Malvinas, Estados Unidos permanecería neutral ante la disyuntiva de a quien apoyar: si a su “aliado” en América o a su socio en la OTAN.

El Plan de recuperación. Aspectos políticos, ideológicos y militares.

Desde la perspectiva de la Junta, la situación interna requería generar un nuevo consenso en torno a la legitimidad – enormemente cuestionada – de los militares en el poder. En 1976, la sociedad había parecido reclamar su “necesaria” presencia e intervención para recuperar el “normal” funcionamiento de la situación institucional; y en 1982 los militares creyeron encontrar la forma de crear la ilusión de que su presencia era aún no solo “necesaria” sino también “deseada” por el pueblo argentino. La “recuperación de las Islas Malvinas” para el país se convirtió así en el instrumento político que la Junta visualizó propicio para relegitimar la permanencia de las Fuerzas Armadas - y de los sectores que los apoyaban - en el poder.

¿Por qué Malvinas? Primeramente porque se trataba de una reivindicación nacional popularmente sentida y permanentemente presente a lo largo de los años, desde el momento mismo de la formación de la Nación Argentina como Estado independiente. Argentina venía reclamando a Gran Bretaña, insistente pero infructuosamente, las Islas Malvinas desde 1833, año en que la guarnición argentina que allí se encontraba fue

⁴⁸ J.C. Gutierrez Contreras; Myrna Villegas Diaz. “Derechos Humanos y desaparecidos en Dictaduras Militares”. www.nuncamas.org/investig/investig.htm.

expulsada por una expedición británica que ocupó las islas. A partir de entonces, el tema de la “recuperación” de la soberanía sobre las Malvinas se convirtió en un permanente reclamo territorial del país y pilar constituyente del nacionalismo tanto territorial como cultural de los argentinos.⁴⁹ Este carácter de “Malvinas” como tema de reivindicación nacional tan largamente anhelado, encerraba ese elemento que permitiría garantizar, de alguna manera, un apoyo indiscutible de parte de la sociedad argentina en su conjunto. Pero además, tenía la capacidad potencial de transformar el carácter de las Fuerzas Armadas, ya que para estas últimas podía significar – al decir de León Rozitchner – pasar “*de la guerra sucia interior a la guerra limpia exterior*”⁵⁰, al recuperar esa parte del país antaño usurpada, reestableciendo por fin la verdadera integridad nacional, y logrando al mismo tiempo convertir en “enemigo” del pueblo argentino a Inglaterra y no ya a la Junta Militar. De esta manera, lo que se pretendía era “reconquistar” las Islas Malvinas para “conquistar” al pueblo argentino.

Luego de casi 150 años – a cumplirse en 1983 - de usurpación por parte de Gran Bretaña, una iniciativa de este calibre podría otorgarle a los militares un consenso único en relación a su presencia en el Estado, ya que la “Cuestión Malvinas” aparecía como la única reivindicación capaz de aglutinar en torno a la Junta a todos los sectores de la sociedad: empresarios, sectores populares, Iglesia y, por supuesto, a las fragmentadas Fuerzas Armadas, potencialmente reivindicadas como adalides de la defensa de la soberanía nacional. Pero además, la recuperación de las islas se relacionaba con la ideología de los militares de una “Argentina Potencia”, y con las posibilidades de llevarla a cabo; consecuencia “lógica” de su intervención en Bolivia y Centroamérica⁵¹. En resumen, la Junta no pensó en Malvinas por patriotismo o reparación histórica, sino con el objetivo de fortalecer su presencia y posición en el marco nacional e internacional. Evidencia de ello son las palabras del

⁴⁹ Escudé, Carlos. “Contenido nacionalista de la enseñanza de la geografía en la República Argentina. 1879-1986”. 2000. www.argentina-rree.com/documentos/contenidos_nac.htm.

⁵⁰ Rozitchner, León. *Malvinas: de la Guerra Sucia a la Guerra Limpia*. Biblioteca Política Argentina. CEAL. Buenos Aires. 1985. Pág. 76.

⁵¹ Dabat, Alejandro. Op. Cit.

Almirante Lambruschini, quien en un discurso dado en mayo de 1981 en el Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra, expresó: *“como nación soberana tenemos que insertarnos en la escena internacional en la posición que nos corresponde y desempeñar el papel que nos cabe en consecuencia... el Atlántico Sur es un área vital para la República Argentina, tiene derechos políticos, económicos y estratégicos que nacen de su geografía, de su historia, de su proyección futura, todos los cuales legitiman e imponen una adecuada presencia nacional en el área.... **un enfoque de la actual situación en la estratégica área del Atlántico Sur, no puede prescindir del imperativo histórico del reintegro de las islas Malvinas al patrimonio nacional, ya que estas representan un factor clave en nuestra concepción estratégica**”*.⁵²

Si bien los reclamos argentinos habían visto resucitar sus impulsos en el año 1965 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a los gobiernos argentino y británico a *“proseguir sin demora las negociaciones... a fin de encontrarle una solución pacífica al problema”*⁵³, lo cierto es que poco se había logrado en el sentido de los reclamos argentinos. Dado este contexto, la idea de recuperar las Malvinas había sido previamente planteada en la Junta en 1977 por dos influyentes miembros de la Marina – los Almirantes Massera y Anaya – pero fue rápidamente descartada por sus restantes miembros, por considerar inadecuadas las condiciones políticas y estratégicas para llevarla a cabo.⁵⁴ Pero la cuestión no dejaría de ser puesta sobre el tapete. A medida que Galtieri ganaba espacios de poder en la cúpula militar, la idea de recuperar las Malvinas militarmente lo hizo con él. Ciertamente, su capacidad para obtener el apoyo de sus pares de la Junta para acceder a la presidencia estuvo ligada a un compromiso hacia el

⁵² Ibidem Pág. 134. Nota N° 26.

⁵³ En 1960, la ONU, en concordancia con las tendencias del mundo hacia la “descolonización”, sancionó la “Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales” (Resolución 1514/1960). Fue en ese marco que en 1965 se elaboró la Resolución 2065 sobre “La Cuestión de las Islas Malvinas”, en la que se reconocía *“... la existencia de una disputa entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas”* e invitaba a ambas partes a retomar las negociaciones. En Bonifacio del Carril. *La Cuestión de las Malvinas*. Hyspamérica. Bs. As. 1986. Pág. 179-180.

⁵⁴ Guglielmelli, Juan. Gral. Div. (R). “Malvinas, la Guerra en el Atlántico Sur”. Revista *Estrategia*. 71-72. Abril-Septiembre 1982.

Comandante en Jefe de la Marina, el Almirante Anaya, de poner en práctica la aspiración de volver a tener control sobre esas islas australes.⁵⁵ De hecho, cuando a mediados de 1981, Anaya viajó a Puerto Belgrano para poner en función al nuevo Jefe de Operaciones Navales – el Vicealmirante Juan José Lombardo – “... en esa oportunidad le ordenó, en reunión privada, que estudiara la posibilidad de la toma de las Islas Malvinas”.⁵⁶ Dicha “posibilidad” era incluso considerada por el embajador británico en Argentina, quien por esos mismos días, pidió a sus superiores en Inglaterra que aceptaran discutir el tema de la soberanía para evitar un deterioro mayor de las relaciones con Argentina, dado que – según su parecer – existía el riesgo de que nuestro país utilizara el tema como “chivo expiatorio” para distraer la atención de los problemas domésticos que lo azotaban.⁵⁷

Una vez en la presidencia, Galtieri comenzó a hacer honor a su compromiso con Anaya y – respaldado por el tercer miembro de la Junta, el Brigadier Gral. Basilio Lami Dozo – tomó la decisión de recuperar las Malvinas, por la fuerza si era necesario. Fue así que el mismo día de su asunción como presidente, Anaya dispuso que el Vicealmirante Lombardo comenzase a trabajar en la preparación de un estudio preliminar para un desembarco militar en las Islas Malvinas.⁵⁸ Lo que tanto Galtieri como Anaya tenían en mente era utilizar la “...**posibilidad** de la ocupación militar de las islas como forma de forzar a Gran Bretaña a la realización de negociaciones serias y definitivas”⁵⁹.

⁵⁵ Potash, Roberto. El Ejército y la Política en Argentina. 1962-1973. Segunda Parte. Editorial Sudamericana. Bs. As. 1994.

⁵⁶ Informe Rattenbach. El Drama de las Malvinas. Editorial Espartaco. Bs. As. 1988. Pág. 47. El “Informe Rattenbach” fue hecho por militares para analizar la conducta de sus comandantes en el conflicto de las Malvinas. La Comisión que lo elaboró (*Comisión de Análisis y Evaluación de Responsabilidades Políticas y Estratégicas Militares del Conflicto del Atlántico Sur*. CAERCAS., creada por decreto del 2/12/1982), fue presidida por el Teniente General Benjamín Rattenbach y su función consistió en evaluar la conducción política y bélica, y emitir opinión fundada sobre las responsabilidades emergentes para su juzgamiento.

⁵⁷ Informe Franks. En Costa Mendez, Nicanor. Malvinas. Esta es la Historia. Editorial Sudamericana. Bs. As. 1993. Pág. 63.

⁵⁸ “El 22 de diciembre de 1981 ordené por escrito a mi Jefe de Estado Mayor, el Vicealmirante Alberto Vigo que dispusiese – como medida preventiva – que el Vicealmirante Juan José Lombardo, recientemente nombrado Comandante de Operaciones Navales, actualizara los planes de ocupación vigentes desde 1968”. De Anaya. “La Crisis Argentino-Británica de 1982”. Pág. 1. En Freedman – Gamba Stonehouse. Op. Cit. Pág. 132.

⁵⁹ Informe Rattenbach. Op. Cit. Pág. 40.

El plan de recuperación de las Islas Malvinas contemplaba un aspecto diplomático, una fase operativo-militar y un aspecto ideológico. En el campo diplomático, la estrategia consistió en endurecer la posición argentina sobre el tema de la soberanía en las negociaciones y diálogos con Gran Bretaña. Según el Informe Rattenbach, al hacerse cargo de la Cancillería, el Dr. Nicanor Costa Méndez tuvo dos reuniones con Galtieri en las cuales se le impartió la escueta directiva de activar al máximo las negociaciones diplomáticas tendientes al reconocimiento de la soberanía argentina en Malvinas, agregando que no descartara que se tuviese que llegar a algo más que la diplomacia en el caso de que Gran Bretaña intentase nuevamente dilatar la resolución de la Cuestión.⁶⁰ Así, durante los meses que siguieron, la Junta apeló a canales tanto formales como informales para hacer comprender a los diplomáticos británicos que la variante de la invasión era una realidad y no un mero “bluff” para coaccionarlos a sentarse a negociar.

El aspecto “ideológico”, o la tarea de preparar al pueblo argentino para la posible operación militar a realizar, también quedó en manos del Ministro de Relaciones Exteriores. Dicha tarea, había comenzado a finales de diciembre de 1981 cuando Costa Méndez comenzó a informar a un selecto grupo de periodistas acerca de las intenciones del gobierno. Les dijo que Argentina estaba decidida a recuperar las Malvinas para finales de 1982, por la vía diplomática si era posible, por la fuerza de ser necesario.⁶¹ De esta manera, y pese al “secreto estratégico” de la operación, se permitió que cierta información se filtrara a los ámbitos políticos, diplomáticos y a la prensa.⁶²

⁶⁰ “La Junta, en la última reunión del año '81, dispuso la preparación de un plan para la defensa de las posiciones argentinas en el Atlántico Sur y la eventual ocupación de las Islas si ello fuera necesario, decisión que luego reiteró en la primera reunión del año siguiente... La Junta, según me dijo el presidente, había tomado esta decisión frente al endurecimiento de las posiciones de algunos grupos de presión británicos y ante la necesidad de estar debidamente preparados en el orden militar para cualquier intento de modificación de las relaciones de fuerza en la zona o para una maniobra británica tendiente a perjudicar o anular los derechos argentinos o cerrar las negociaciones definitivamente”. Costa Mendez, Nicanor. Op. Cit. Pág. 75.

⁶¹ Equipo The Sunday Times. La Guerra de Malvinas. Londres Editorial Argos Vergara. 1983.

⁶² Indicios de que la Junta tenía planes militares en relación a las Malvinas podían leerse ocasionalmente en medios gráficos, sobre todo a través de la pluma del columnista del Diario “La Prensa” Jesús Iglesias Rouco (17 y 24 de enero de 1982, 7 y 18 de febrero de 1982, 3 de marzo de 1982), y el del Diario “Convicción” Ezequiel Lezama (27 de enero de 1982).

Los preparativos militares preliminares de la ocupación recayeron en primera instancia en el Vicealmirante Juan José Lombardo, quien – conjuntamente con sus subordinados directos, los Jefes de Estados Mayores de la Flota de Superficie, la Infantería de Marina y la Aviación Naval – elaboró un plan contingente relacionado con el uso de la fuerza armada. El eje del plan – que en ciertos aspectos, rescataba elaboraciones hechas por la Armada a finales de la década del '60 - consistía en sorprender a la guarnición británica y apoderarse de las Islas con el mínimo de bajas. Fue así que el 2 de enero de 1982, la Junta consideró el llamado “Proyecto Alfa”, elaborado por primera vez en mayo del año anterior a pedido del Alte. Lombardo y nunca ejecutado. El mismo contemplaba reproducir con éxito una iniciativa de 1976, cuando en uno de los primeros actos del PRN se había establecido una presencia militar en Thule del Sur (una de las islas Sándwich del Sur), con el objetivo de fundar una base con vistas a la investigación científica futura. A pesar de las protestas inglesas ante esta presencia en “territorio británico”, el programa no fue suspendido, lo que constituía un precedente atractivo. Los partidarios del “Proyecto Alfa” habían supuesto que Gran Bretaña aprendería a tolerar una presencia argentina en las Georgias del Sur como lo habían hecho en Thule del Sur. Sin embargo, a requerimiento del Comando de Operaciones Navales, volvió a estimarse que el momento de ejecutarlo no era el adecuado, dado que cualquier acción aislada podría ser inconveniente en las circunstancias en las que se encontraban las negociaciones, y se pretendió evitar un hecho potencialmente negativo para el desarrollo de futuros diálogos con los ingleses.⁶³ A pesar de ello, la reunión no fue infructuosa ya que la Junta terminó aprobando la “Directiva de Estrategia Nacional I/82”, “estrictamente secreta”, por la que se resolvía “*analizar la posibilidad de utilizar el poder militar para obtener el objetivo político*”⁶⁴.

Finalmente, el 12 de enero se designó un equipo de trabajo cuya tarea sería elaborar un plan de ocupación de las islas, que se ejecutaría en el caso

⁶³ De Vita, Alberto. Malvinas/82. ¿Cómo y Por qué?. Instituto de Publicaciones Navales. Buenos Aires. 1994. Freedman-Gamba Stonehouse. Op. Cit.

⁶⁴ Cit. En Novaro, Palermo. Op. Cit. Pág. 419.

de que la próxima ronda de negociaciones con Gran Bretaña (a celebrarse el 27 y 28 de febrero en Nueva York) fracasara. Este equipo quedó integrado por el General Osvaldo Jorge García (Comandante del V Cuerpo del Ejército), el Alte. Lombardo, y el Brigadier Mayor Sigfrido Martín Plessl; y recibieron la directiva de mantener el “máximo secreto”. Su función sería la de elaborar un plan militar de alternativa a la estrategia diplomática que contemplase la toma de las Malvinas por las Fuerzas Armadas Argentinas.⁶⁵

El objetivo de la Junta era poner en marcha una operación militar destinada a provocar una repercusión internacional tal que obligara a Gran Bretaña a encarar seriamente las negociaciones sobre la soberanía de las islas; y una repercusión nacional tal que le permitiera a Galtieri utilizar la “Cuestión Malvinas” como trampolín final para crear una fuerza de apoyo al gobierno, heredera política del proceso, que soportara en el futuro su candidatura como candidato a presidente constitucional. Desde su óptica, un “triunfo” en el tema Malvinas habría justificado histórica y definitivamente al gobierno de las Fuerzas Armadas y sostendría electoralmente el liderazgo de Galtieri en un futuro gobierno de transición cívico-militar.⁶⁶ Fue así que, mientras Galtieri hacía intentos por fortalecer su posición política presente y futura en un célebre almuerzo con 10.000 personas en La Pampa, el entonces Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Capitán de Navío Raúl Suárez del Cerro, se animaba a declarar a la prensa: *“Me siento gobernador de las Islas Malvinas y espero que Dios me de la oportunidad de poder gobernar desde las propias Islas, y que ello pueda suceder antes de que termine nuestro mandato”*. Bajo las intenciones existentes, en los medios políticos estas declaraciones sorprendieron a pocos. El mismo periódico que las había hecho públicas agregó que tales manifestaciones no debían ser *“...interpretadas como una exteriorización*

⁶⁵ Informe Rattenbach. Op. Cit. Costa Mendez, Op. Cit. De Vita. Op. Cit.

⁶⁶ “En busca de la fuerza heredera del Proceso”. Diario La Nación. 20 de febrero de 1982. Pág. 12. / Cardozo, Oscar Raúl; Kirchbaum, Eduardo; Van Der Kooy, Eduardo. Malvinas. La trama secreta. Buenos Aires. Planeta. 1992. – Novaro, Marcos; Palermo, Vicente. OP. Cit.

personal o aislada, sino que deben encuadrarse dentro de una política en gestación de los militares argentinos". ⁶⁷

Persiguiendo este horizonte, al Equipo de Trabajo se le asignó la tarea de realizar una investigación preliminar, para determinar si una operación militar sobre Malvinas podía considerarse "apta, factible y aceptable", como lo era para la Armada desde tiempo atrás.⁶⁸ Determinando que sí lo era, se elaboró un plan que contemplaba: el desembarco en las Malvinas por las FF.AA., la instalación de un gobierno argentino, y la retirada inmediata de las tropas intervinientes, a excepción de los efectivos indispensables para mantener la seguridad y control sobre territorio malvinense. Además se determinó que para que el plan tuviera éxito era necesario cumplir con dos requisitos: actuar con "sorpresa táctica", es decir, realizar un desembarco sin advertencia previa y en lo posible sin derramamiento de sangre; y actuar bajo el mayor "secreto estratégico" para evitar que Inglaterra tuviera oportunidad de reforzar su reducida dotación – de 40 infantes de marina – en las islas. ⁶⁹

Una vez llevado a cabo el operativo militar – que en definitiva no contemplaba más que el desembarco de fuerzas militares en Malvinas – vendría la etapa de las negociaciones diplomáticas con Gran Bretaña. En ellas, se buscaría convencer al gobierno británico del "hecho consumado", ofreciendo concesiones que iban desde indemnizaciones a los isleños y a las empresas comerciales, hasta ofertas de cooperación económica con empresas británicas que quisieran explotar con Argentina el petróleo de la Cuenca Austral o la pesca del Krill. Además, se pensaba involucrar a Estados Unidos en la negociación, para que convenciera a Gran Bretaña de que no había "marcha atrás", y que debían aceptar la nueva situación en el

⁶⁷ Diario La Nación 12 de febrero de 1982. Pág. 5.

⁶⁸ "Dicho Comité tenía que prever el uso del poder militar, preverlo en el sentido de determinar la factibilidad y la aceptabilidad de la operación, que fue lo que hizo. Desde el punto de vista de la Armada, que eran planes hechos desde hace muchos años, el problema de la ocupación era un problema que evidentemente sí era apto, factible y aceptable, de manera que el problema era que si en forma conjunta se veía de la misma manera. Produjeron una serie de ideas en un documento que realmente nos ratificaron que era apto, factible y aceptable..." Declaración Indagatoria del Alte. Anaya ante el Tribunal Militar. Cuerpo 5. foja 1075. cit en De Vita. Op. Cit. Pág. 24.

⁶⁹ "Si dábamos preaviso, si se sabía o se suponía lo que íbamos a hacer, iban a mandar los submarinos y eso iba a hacer que la flota de mar no pudiera actuar... por eso el secreto de la operación". Declaración del Vicealmirante Lombardo. Cuerpo 5. Foja. 5868. Ibidem. Pág. 25.

Atlántico Sur tal cual estaba dada. Teniendo en cuenta la importancia dada al “secreto estratégico” de la operación, sería recién pocos días antes del viaje a Nueva York que la Junta autorizó a Galtieri a informarle en forma concreta a Costa Méndez acerca del plan de ocupación que se había delineado.⁷⁰

En resumen, el plan elaborado se perfilaba como una estrategia político militar “alternativa” de la Junta a poner en práctica en caso de que la próxima ronda de negociaciones de fines de febrero con Gran Bretaña fracasara. El objetivo ulterior que se perseguía era forzar a Londres a encontrar una solución definitiva a una cuestión ya dilatada por demasiado tiempo, que abriera el camino para la continuidad y estabilidad del PRN. Como afirma el General (R) Juan Guglielmelli, la Junta optó por la opción Malvinas guiados por *“la creencia en un éxito seguro, rápido y no costoso, lo cual prometían las actitudes atribuidas a Gran Bretaña y a Estados Unidos”*⁷¹.

Como lo anticipan estas palabras, el plan elaborado por la Junta estuvo desde un comienzo basado en premisas que resultaron totalmente falaces y erróneas. En primer lugar, no contemplaba bajo ninguna circunstancia una reacción militar por parte de Gran Bretaña como la que finalmente tuvo lugar. Partiendo del supuesto de una debilidad notoria del Gobierno conservador de la Primer Ministro Margaret Thatcher (1979-1990) – azotado por una importante crisis socioeconómica y sometida al desguace de su Real Armada⁷²– los militares argentinos consideraron que ante el “hecho

⁷⁰ “A mediados de febrero (de 1982), el presidente Galtieri me comunicó que la Junta había decidido preparar un plan de ocupación como alternativa. No mencionó en momento alguno, ni directa ni indirectamente, la decisión de ponerlo en práctica. (...) Fue una decisión estrictamente militar, la Junta aún no había adoptado decisión política alguna.” Nicanor Costa Méndez. OP. Cit. Pág. 167.

⁷¹ Guglielmelli, Juan. Op. Cit. Pág. 32.

⁷² Hacia 1982 nadie creía que el partido conservador británico pudiera acceder a un nuevo período de gobierno. Sumido en una profunda crisis (recesión, inflación, desocupación) el malestar social de los ingleses se expresaba en numerosas manifestaciones antigubernamentales, epítome de la cual fue la convocatoria del 31 de mayo de 1981, cuando 100.000 personas se reunieron en Trafalgar Square (Londres) para manifestarse contra la política económica. Hacia diciembre de ese año, se calculaba que el apoyo popular al Gobierno era solo del 25 %. Sumado a ello, a mediados de año, y a instancias del Ministro de Defensa John Nott, se había resuelto el recorte en equipamiento y en más de 50.000 hombres de la flota de superficie de la Royal Navy (Real Armada británica). Estos hechos fueron los que indujeron a la Junta a concluir - erróneamente - cual sería la postura que adoptaría Gran Bretaña en caso de una acción militar argentina. No previeron la posibilidad de que el Gobierno liderado por la “Dama de Hierro” podría pretender utilizar el episodio con el mismo objetivo político que la Junta, y que además,

consumado” del desembarco, Londres aceptaría la situación y se inclinaría por la opción diplomática, más que dispuesto a negociar una solución definitiva al tema de la soberanía. Es decir, los militares argentinos estaban firmemente convencidos de que Gran Bretaña no se involucraría – dados sus problemas políticos y militares internos - en una confrontación armada para recuperar unas islas demasiado lejanas y desoladas para ser significativas para el Reino. Reveladoras de este supuesto, resultan las declaraciones del Ministro del Interior, General Alfredo Saint Jean, cuando afirmó que “... una guerra sería algo descabellado, una cosa anacrónica. Casi a las puertas del siglo XXI no se puede concebir que se pretenda recuperar mediante una acción de fuerza una colonia perdida”⁷³; o las del mismo Galtieri que, en pleno enfrentamiento bélico debió admitir: “Nunca esperé una respuesta tan desproporcionada. Nadie lo esperó. ¿Por qué un país situado en Europa podría preocuparse tanto por unas islas que no sirven a ningún interés nacional? Me pareció insensato”⁷⁴. En definitiva, “lo que no estaba previsto es que Inglaterra tuviera tan poca predisposición a negociar”.⁷⁵

En segundo lugar, se convencieron de que las cosas no llegarían a mayores porque Estados Unidos intervendría en el conflicto entre ambos países para apoyar a Argentina, o en su defecto adoptaría una posición neutral⁷⁶. Se descontaba que Washington actuaría como mediador para la búsqueda de una solución pacífica entre sus dos “mejores aliados”; y en caso de que Gran Bretaña procediera en forma contraria a la prevista, evitaría que se llegase a la instancia de un enfrentamiento bélico. Fue por ello que Galtieri se sintió verdaderamente “traicionado” ante la posición

el ejército británico – desguace o no - “... disponía de 71.000 hombres en Gran Bretaña y 55.000 soldados aún en Alemania... Además tenían guarniciones en Hong Kong, Gibraltar, Chipre, Bruneri y Belice, todas con un alto nivel de adiestramiento” y disponibles para enfrentar a las FF.AA. argentinas, en cualquier momento y lugar. Gral Martín Balza. Malvinas. Gesta e Incompetencia. Editorial Atlántida. 2003. Pág. 75.

⁷³ Diario Clarín. 11 de abril de 1982. Pág. 14.

⁷⁴ Diario Clarín. 13 de junio de 1982. Tomado del reportaje de la periodista italiana Oriana Fallaci a Galtieri para la revista “The Times”.

⁷⁵ Palabras del Secretario de Planeamiento Nacional, Brigadier Mayor José Miret. En “Hablan dos militares argentinos”. Revista Gente. 6 de mayo de 1982.

⁷⁶ “Yo confiaba que ellos (los norteamericanos) conservaran una equidistancia de posiciones (entre Argentina y Gran Bretaña)... no esperaba que ellos asumieran la posición que luego tomaron”. Gral. Galtieri. Diario Clarín. Suplemento Especial. 2 de abril de 1983. Pág. 1.

probritánica que Estados Unidos terminó adoptando en el conflicto: “... Debo decir que les guardo un gran rencor porque los norteamericanos saben muy bien que siendo Comandante en Jefe del Ejército, es decir, antes de ser presidente, siempre traté de acercarme a ellos y a su administración... Fue muy decepcionante cuando (Haig) se puso de parte de los ingleses... Lo peor es que Reagan y su plana mayor hicieron lo mismo. A decir verdad, los argentinos comparten mi opinión de que esto es una traición”.⁷⁷

En resumen, la posibilidad de que choques armados se produjeran en el Atlántico Sur como consecuencia de la jugada política ideada por el Régimen, no entraba ni remotamente dentro de las consideraciones de la Junta. Convencidos de lo atinado de sus suposiciones, los militares argentinos esperaron ansiosos las negociaciones de Nueva York, de cuyo éxito o fracaso dependía la puesta en marcha del plan de ocupación de las islas⁷⁸. Finalmente, la VI ronda de negociaciones entre ambos países se celebró... y fracasó. Y la cúpula militar actuó en consecuencia. Por un lado, hizo una pública declaración que resultaría sumamente significativa y reveladora de los planes de la Junta. El 2 de marzo, dio a conocer un comunicado en el que informaba que, dado el resultado negativo de las negociaciones, y de no registrarse progresos sustanciales en el corto plazo, la Argentina se arrogaba “...el derecho de poner término al funcionamiento de ese mecanismo y de elegir libremente el procedimiento que mejor resulte a sus intereses”⁷⁹, y paso seguido decidió poner en marcha el motor de la operación militar. Ese mismo día, el General de Brigada Mario Benjamín Menéndez fue informado acerca de los planes existentes de recuperar militarmente las islas y el rol que se pretendía desempeñase: Gobernador Militar de las Malvinas.⁸⁰ Pocos días después de este nombramiento, el Secretario General de la OEA, Alejandro Orfila, anunciaba enfáticamente lo que estaba por venir: “Estoy seguro que no ha de pasar mucho tiempo para

⁷⁷ Gral. Galtieri. “Argentina seguirá combatiendo”. El Nacional. Caracas. 16 de junio de 1982. Cit. En Cisneros, Andrés; Escudé, Carlos. “Las relaciones con Estados Unidos”. Op. Cit. Nota N° 83.

⁷⁸ Guglielmelli, Juan. Op. Cit.

⁷⁹ Cit. En Informe Rattenbach. Op. Cit. Pág. 37-38.

⁸⁰ Cordozo, O.; Kirchbaum, E.; Van der Kooy, E. Op. Cit.

que en ese rincón del territorio nacional ondee la bandera de la Patria".⁸¹ Y así fue.

Antecedentes inmediatos del conflicto: el "Incidente Georgias" y la marcha del 30 de marzo de 1982.

Pocos días después, comenzaron a desencadenarse una serie de acontecimientos que acelerarían – a instancias de la Junta Militar – la concreción inmediata de un plan que hasta poco antes de su ejecución no parecía tener una fecha precisa de inicio de las operaciones.⁸² Uno de estos episodios fue el llamado "Incidente Georgias", también conocido como "Crisis de los Chatarreros". Los orígenes de este incidente se remontan al 9 de marzo de 1982, cuando el propietario de la Compañía Georgias del Sur S.A., Constantino Davidoff, informó oficialmente a la Embajada Británica en Buenos Aires del viaje que realizaría al Atlántico Sur. El motivo: el desguace de instalaciones balleneras de la Empresa escocesa *Christian Salvensen Limited* en la isla de San Pedro, en virtud de un contrato comercial que ambas partes habían contraído en 1979. El mismo establecía la compra por parte de la compañía de Davidoff de la chatarra existente en esa locación, proveniente de una ex factoría de ballenas abandonada. Davidoff informó asimismo el transporte que utilizaría – el buque de la Armada *ARA Bahía Buen Suceso*, perteneciente a la línea marítima "Costa Sur" de Transportes Navales⁸³ – y una lista del personal de la empresa que realizaría la expedición, aprobada previamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. La autorización para realizar la travesía no tardó en ser concedida, ya que Gran Bretaña, además de haber intervenido en la

⁸¹ Diario La Nación 7 de marzo de 1981. Pág. 1.

⁸² "(El plan)...no tenía prevista una fecha determinada... podría ser julio de 1982". Declaración del Gral. García Cuerpo 4. Foja 760. "La fecha más temprana 15 de mayo de 1982, con un preaviso no menor a 15 días; y como fecha deseable o aceptable, digamos entre agosto o septiembre de 1982" Vicealmirante Suárez del Cerro. Cuerpo 3. Foja 627. "Podría haberse realizado como a fines de 1982, a fines de 1983, 1984, o no realizarse". Tnte. Gral. Galtieri. Cuerpo 5. Foja 924. En De Vita. Op. Cit. Pág. 26-27.

⁸³ En 1979, Davidoff se puso en contacto con las autoridades de Puerto Stanley (Islas Malvinas) a fin de ponerlas en conocimiento de la existencia del acuerdo y sondear la posibilidad de alquilar una embarcación para transportar la chatarra de las factorías, a lo cual las autoridades se habrían negado. Informe Rattenbach. Op. Cit.

tramitación de los papeles habilitantes, había legalizado el contrato comercial firmado en el año '79 entre Davidoff y la compañía escocesa.

El 11 de marzo zarpó finalmente el Bahía Buen Suceso rumbo a las Georgias del Sur, arribando una semana después. El día 20, producido el desembarco del personal de Davidoff en Puerto Leith (Isla de San Pedro), se produce el episodio que haría las veces de detonante del conflicto bélico que sobrevendría después. Ante la presencia de una embarcación de la Armada Argentina, un grupo de científicos ingleses pertenecientes al *British Antarctic Survey* que se hallaban observando el desembarco, informó al gobierno de las Malvinas que un grupo de civiles y militares había izado una bandera argentina en el lugar. La información no tardó en llegar a Londres y el 22 de marzo el *Foreign Office* reclamó fundado no solo en el izamiento de una bandera argentina en “territorio británico”; sino también en la falta de autorización de Puerto Grytviken para desembarcar, lo que convertía a la presencia del personal argentino en ilegal⁸⁴. Londres exigió el retiro inmediato del contingente argentino y, paso seguido, se decidió el envío del *HMS Endurance*, amenazando con desalojar por la fuerza al grupo que aun permaneciese en el lugar.

Ante ello, el Comando Superior de las Fuerzas Armadas decidió que otro buque – el ARA Bahía Paraíso – que en esos momentos “casualmente” se encontraba en las Islas Orcadas cumplimentando una fase del Planeamiento Antártico, se destacara de inmediato a las Georgias para desembarcar al “Grupo Alfa”, curiosa denominación si tenemos en cuenta que la operación del mismo nombre había sido desestimada. Este grupo de “tropas de elite” de la Armada, con el Tnte. Alfredo Astiz a la cabeza, tenían la misión de tomar posiciones en las instalaciones balleneras y proteger a los trabajadores argentinos de una eventual acción de las fuerzas británicas. Aparentemente, dada la gravedad de la situación, la Junta consideró activar

⁸⁴ Para que ciudadanos argentinos y *Kelpers* pudieran ingresar legalmente en Malvinas o en el territorio continental argentino sin pasaporte, debían presentar un documento emitido por el gobierno argentino y por las autoridades de Puerto Stanley: las “Tarjetas Blancas”. La Embajada Británica aceptó la expedición privada de Davidoff solicitando que pasaran por Grytviken para una autorización formal del *British Antarctic Survey*, lo que suponía una presentación de tarjetas blancas. Al instalarse directamente, los “chatarreros” desconocieron ese acuerdo.

el plan cuya preparación se había dispuesto a comienzos de año⁸⁵. La intención inicial era que, una vez desembarcada la gente de Davidoff (y sin su pleno conocimiento), los militares asentaran una estación científica en el lugar, tal como había sido considerado. Sin embargo, a su llegada a la isla, el Bahía Buen Suceso se dirigía ya de regreso rumbo a Ushuaia. Al día siguiente, el ARA Bahía Paraíso con el Grupo Alfa a bordo, se retiró a Bahía Stromness con la orden de mantenerse alerta y actuar en caso de que el *Endurance* o su tripulación intentara evacuar a los operarios argentinos.⁸⁶

Este incidente le sirvió de “excusa ideal” a ambos gobiernos (el argentino y el británico) para servir a sus intereses políticos más inmediatos: salir de su propio atolladero dándole aire a sus respectivos gobiernos, retardar los reclamos de una salida electoral y neutralizar el malestar social generado por una profunda crisis económica, canalizando ese descontento hacia un “enemigo” externo. Fue por ello que ninguno de los dos gobiernos pareció dispuesto a ceder en lo que a sus posiciones diplomáticas se refería. La tensión entre ambos países solo tendió a crecer, enturbiando el poco auspicioso panorama que la Junta ya enfrentaba a fines de marzo.

A la “inusitada intransigencia” británica en el plano diplomático para resolver el incidente en la Isla de San Pedro (demostrada no solo por el envío del *Endurance* al Atlántico Sur, sino también al de otros dos navíos de guerra como el *Biscoe* y el *Bransfield*, con refuerzos de infantería), se sumaba la cada vez más crítica situación interna, motivo primordial del gobierno argentino para poner toda esta operación en marcha. Las medidas adoptadas por Alemann resultaron totalmente impopulares y pusieron de manifiesto que camino seguiría – o a que senda retornaría – la política

⁸⁵ Costa Méndez, Op. Cit. Informe Rattenbach, Op. Cit. Guglielmelli, Op. Cit., Cardozo, Kirchbaum, Van der Kooy, Op. Cit. De Vita, Op. Cit.

⁸⁶ “La Operación Alfa creo que ha originado bastantes confusiones, es una operación que nada tuvo que ver con Davidoff, que no se ejecutó nunca, que se planificó específicamente y que luego si se aprovechó al grupo de la operación para impedir que los trabajadores que estaban en Leith fuesen reembarcados en el *Endurance*, pero a su vez con gran prudencia, porque se le dio la orden de que si estaba el *Endurance*, que no desembarcase ese grupo para defender a los trabajadores para evitar escalar; esa fue la orden que se le dio. Llegaron antes que el *Endurance* y por eso desembarcaron.” Alte. Anaya. Declaración Indagatoria ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Foja 1021. Cit. En De Vita, Op. Cit. Pág. 45.

económica del régimen. Mientras la Junta planificaba, decidía y ejecutaba en torno al tema Malvinas, se liberó el tipo de cambio, se dejó sin efecto el control de las tasas de interés, se congelaron tarifas y salarios públicos y se buscó mantener un nivel elevado de desempleo⁸⁷. Además, por motivos fiscales, se siguió adelante con el proyecto de privatización masiva de organismos y empresas del Estado (particularmente del subsuelo)⁸⁸, se reintrodujeron los impuestos a la exportación y se modificó la estructura arancelaria; todo ello para reducir las necesidades de financiamiento y contener la emisión que en casi 4 meses se había logrado fuera prácticamente nula⁸⁹. Pero más allá de sus objetivos de largo alcance, en lo inmediato se trató de un plan recesivo aplicado a una economía en recesión, que se ganó el rechazo de casi todos los sectores.⁹⁰ Las quiebras comerciales y empresariales continuaban sucediéndose y las protestas por la situación económica (huelgas, movilizaciones, marchas de protesta, tomas de fábricas) tenían ya lugar en forma interrumpida en todo el país.⁹¹

Fue en este marco que – paralelamente a lo que estaba sucediendo en las Georgias – el 19 de marzo, la CGT - luego de haber anunciado en

⁸⁷ Novaro, Palermo. Op. Cit.

⁸⁸ Dicho plan contemplaba la privatización de organismos y empresas dependientes de diferentes áreas, como por ejemplo, del sector Obras y Servicios Públicos (Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, ATC–Canal 7, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, CONARSUD Asesoramiento y Consultoría S.A., Obras Sanitarias de la Nación, Hidroeléctrica Norpatagónica, Agua y Energía Eléctrica, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), YPF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado, Dirección Nacional de Viabilidad, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, Petroquímica Río Tercero), de Economía (Seguros Aeronáuticos Empresa del Estado, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, bancos oficiales, Instituto Nacional de Reaseguros (INDER), Casa de la Moneda, Austral Líneas Aéreas, Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, Licitaciones Mineras, Sociedad de Economía Mixta, Tenencias Accionarias del Banco Nacional de Desarrollo y Caja de Ahorro y Seguro, Papel Misionero, SIAM S.A., Lagos del Sur S.A., Corporación Argentina de Productores de Carne, Compañía Nacional Azucarera S.A.), del Ministerio del Interior, del área de Educación, de Acción Social, de Agricultura, entre otras. Diario Clarín. 29 de Abril de 1982.

⁸⁹ Gerchunoff y Llach. Op. Cit.

⁹⁰ Durante los dos primeros meses de aplicación del programa económico, numerosos sectores manifestaron expresa y públicamente su rechazo al mismo: la Multipartidaria, representantes políticos de diversas organizaciones partidarias (PJ, MID, UCR, Democracia Cristiana), la CNT, la CGT, la Unión Industrial Argentina, los sectores ferroviario y transportista, los estatales, la Cámara Argentina de Comercio y de la Construcción, la Federación de Industriales Textiles, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Confederación de Asociaciones Rurales del Centro y Litoral Oeste (CARCLO), la Fundación de Investigadores para el Desarrollo (FIDE), entre otros.

⁹¹ 2 de marzo: 2000 personas en Plaza de Mayo en reclamo por los desaparecidos y la crisis económica; 9 de marzo: protesta de estatales para reclamar la solución de sus problemas salariales y en contra del plan de privatizaciones del gobierno, y de la CNT frente al ministerio del Interior; 18 de marzo: protesta de jubilados y pensionados y portuarios por mejoras salariales, y marcha de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos por los desaparecidos; 19 de marzo: 5000 personas en Paraná en un acto de la Multipartidaria, y una marcha por los derechos humanos en Plaza de Mayo.

febrero un plan de movilización “activo, continuado y con fechas fijas”⁹² - decidió convocar a todos los sectores del país a un acto masivo en Plaza de Mayo para el día 30, para “*decir basta a este proceso que ha logrado hambrear al pueblo sumiendo a miles de trabajadores en la indigencia y la desesperación*”, y “*reclamar la reversión de este proceso, la reactivación del aparato productivo, un urgente incremento del salario... y la restauración de la democracia*”⁹³. La convocatoria, a la que inmediatamente se plegó la CNT, amenazaba con tener una adhesión masiva y nacional, indicio de un verdadero desborde social para el régimen.

Ante estas circunstancias, para Galtieri se hizo imperioso “*ocupar las Malvinas, porque no quedaba otra salida*”.⁹⁴ El 26 de marzo se decide que el Comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur – Vicealmirante Lombardo – expusiese ante el Comité Militar – Alte. Anaya, Gral. Galtieri y Brigadier Lami Dozo – las fechas más tempranas y aceptables para considerar la ejecución de la llamada “Operación Azul”. Ese día, “*la Junta consideró formalmente distintos modos de acción: a) continuar con las negociaciones con Gran Bretaña; b) someter el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU; c) ocupar Malvinas. Luego de un rápido análisis decidió adoptar el modo de acción C), esto es: ocupar las islas. Con este fin, se consultó a la comisión de trabajo, que estableció como posible fecha más próxima la que mediaba entre el 1 y 3 de abril*”⁹⁵. Evidentemente, la Junta había decidido aprovechar la situación creada por el Incidente Georgias y el desborde social que amenazaba con desatarse en pocos días más, para adelantar el desembarco en Malvinas para el 1° de abril.

Mientras tanto, en el plano interno, pocos días antes de que tuviera lugar la marcha convocada por la Central Obrera – y admitiendo la posibilidad de futuros desarrollos en esa dirección – , José Rodríguez (Secretario General de la CGT) anunció que la marcha del 30 de marzo solo se suspendería si hubiera un problema grave de soberanía, pero al mismo

⁹² Diario La Nación. 17 de febrero de 1982. Pág. 5.

⁹³ Diario La Nación. 24 de marzo de 1982. Pág. 1.

⁹⁴ Palabras del General Galtieri al recién designado embajador argentino en la ONU, Dr. Eduardo Roca, en reunión privada el 20 de marzo de 1982. Cit. En Balza, Martín. Op. Cit. Pág. 23.

⁹⁵ Informe Rattenbach. Op. Cit. Pág. 78.

tiempo advertía sobre la posibilidad de que *“se utilicen los sentimientos patrióticos del pueblo para parar la protesta social en ciernes”* y *“distraerlo y evitar reacciones ante una situación social insostenible”*⁹⁶. Parecía haber resumido en una frase las intenciones que la Junta había tardado meses en delinear.

Las últimas dos jornadas de marzo demostraron el escaso margen de maniobra que le quedaba al régimen militar. El 30 se llevó a cabo la protesta que concentró a miles de manifestantes en todas las grandes ciudades del país. Y el gobierno se preparó para recibirlos: la Plaza de Mayo fue cercada con patrulleros, camiones hidrantes, policías a caballo, carros de asalto y hasta helicópteros. La restricción para acceder a la plaza provocó enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, al igual que sucedió en Puente Pueyrredón – donde una gruesa columna de obreros fue interceptada y reprimida -, Tribunales y el puerto de Buenos Aires. Situaciones similares se produjeron en ciudades del interior donde hubo actos: Mendoza, Rosario, Tucumán, Córdoba y Mar del Plata. La jornada de protesta dejó más de mil detenidos (entre ellos, muchos representantes sindicales), heridos y un muerto en Mendoza. Al día siguiente, la CNT reclamó la libertad de los detenidos y decretó un paro con fecha a determinar. La crisis interna del régimen había alcanzado su punto más álgido, y a pocas horas se estaba de ver si el “tubo de oxígeno” elegido por la Junta para darle aire al PRN era tan efectivo como ilusoriamente se había creído.

“Operación Rosario” en marcha.

La Operación Azul, ahora rebautizada “Operación Virgen del Rosario”, se ejecutó desde las 23:45 hs. del 1 de abril, en que se produjo el desembarco inicial de tropas argentinas en Malvinas, hasta las 12:30 del 2 de abril en que, finalizada la resistencia británica, se izó la bandera argentina frente a la Gobernación de las Islas.

⁹⁶ Diario La Nación. 28 de marzo de 1982 (pág. 12) y 29 de marzo de 1982 (pág. 9) respectivamente.

Ese mismo día, Galtieri se dirigió a la Nación para transmitirle los *“fundamentos que avalan una resolución plenamente asumida por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que interpretan así el profundo sentir del pueblo argentino”*⁹⁷: se habían recuperado las Islas Malvinas. La reacción de los argentinos ante este anuncio pareció ser exactamente lo que la Junta había estado esperando. En el mismo escenario en el que dos días antes había sido violentamente reprimida la manifestación de la CGT, tuvo lugar una imponente y espontánea movilización popular de apoyo a la acción del gobierno. Inmediatamente, y con el objeto de ganar un amplio e indiscutible apoyo, sumado al “éxito” de la acción concertada, Galtieri dispuso - para que *“...todos los argentinos puedan asociarse a los acontecimientos de este histórico día para la República”*⁹⁸ -, el cese del arresto que cumplían más de dos mil personas detenidas durante la última manifestación.

Sin embargo, y a pesar de las primarias muestras de apoyo que el gobierno de las Fuerzas Armadas recibió de parte de diferentes sectores de la sociedad - inclusive de los más opositores - en muchos casos, ese apoyo supo discernir la solidaridad con la recuperación del archipiélago de un respaldo indiscutido al PRN a partir de ese momento. Así, la Multipartidaria expresó su *“total apoyo y solidaridad con la acción llevada a cabo”*, pero aclaró que *“su decisión de respaldar todas las medidas conducentes a la consolidación de la soberanía no significan la declinación de las conocidas posiciones sustentadas... frente a la política del gobierno en los distintos campos de la soberanía nacional”*⁹⁹. De la misma manera, la CGT afirmó que *“las circunstancias no nos permiten manifestar nuestra total identificación con el acto soberano llevado a cabo por las FF.AA. argentinas”*¹⁰⁰, y por su parte la UCR sostuvo que *“sin declinar una sola de nuestras actitudes en el orden político interno, declaramos nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas en este trascendente hecho que exige*

⁹⁷ Mensaje Presidencial desde la Casa Rosada. Viernes 2 de abril de 1982. Diario Clarín, 3 de abril de 1982.

⁹⁸ Diario Clarín. 3 de abril de 1982. pág. 5.

⁹⁹ Diario Clarín. 3 de abril de 1982. pág. 6.

¹⁰⁰ Ibídem.

*una rígida y convencida unidad nacional*¹⁰¹. Otros fueron más allá, y explícitamente le exigieron al gobierno *“dar respuesta justa a los candentes problemas que afectan a la otra parte de la soberanía nacional: la soberanía del pueblo argentino”*¹⁰², mientras que Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas expresó: *“no podemos dejar de pensar en nuestros detenidos y desaparecidos, que seguramente hubieran apretado filas junto a los soldados y que no pueden hacerlo por su injusta desaparición”*¹⁰³.

A pesar de ello, la Junta ignoró estas expresiones de lo que verdaderamente era el sentimiento del pueblo argentino y decidió malinterpretar las muestras de apoyo colectivo generadas. Confundieron la expresión de júbilo que significó la concentración en Plaza de Mayo y el respaldo político recibido de parte de diferentes sectores políticos y económicos por la recuperación de las Islas, con apoyo y aceptación del PRN y de Galtieri como Presidente de la Nación. Pensaron que ya habían ganado el consenso buscado. Y durante el corto tiempo en que los acontecimientos se desarrollaron en la dirección que la Junta había previsto, así pretendieron mostrárselo al mundo... y a ellos mismos. Un ejemplo fue la recepción organizada en un marco de respaldo popular, de unidad y consenso, para la visita al país del Secretario de Estado norteamericano Alexander Haig.

En su carácter de mediador en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, Haig – luego de su paso por Londres - sería recibido por Galtieri el 10 de abril en Casa de Gobierno; por lo que se planeó una manifestación popular para llenar la Plaza de Mayo con el objetivo de demostrar al enviado norteamericano y a la opinión pública internacional, la unidad de los argentinos en torno al tema Malvinas. Organizada por la emisora radial metropolitana de mayor audiencia (Radio Rivadavia) y por ATC, la iniciativa fue convalidada por dirigentes políticos y gremiales, los diarios publicaron mapas del microcentro porteño para facilitar el acceso a la Plaza y, para

¹⁰¹ Ídem.

¹⁰² Jorge Triaca. Diario Clarín, 3 de abril de 1983.

¹⁰³ Diario Clarín. 8 de mayo de 1982.

lograr una masiva concurrencia al acto, se dispuso que los transportes públicos fueran gratuitos ese día. El mismo Galtieri salió a avalar la convocatoria y pidió a los argentinos que *“llenen la Plaza y la República... (para) manifestarle a los americanos que el pueblo argentino está unido”*.¹⁰⁴ Y ese 10 de abril la plaza se llenó y reflejó, cual espejismo, ese espíritu de unanimidad, consenso y respaldo que la Junta buscaba. Pero, una vez más, apoyar una acción militar reivindicativa de un reclamo que parecía ir más allá de cualquier posicionamiento político, no era sinónimo de apoyo al PRN, a la Junta o a Galtieri. Es por ello que cuando este último se dirigió a los presentes y se invocó a sí mismo como “Presidente de la Nación” y fue abucheado, debió de haberse percatado de ello.¹⁰⁵

En los días siguientes, el gobierno argentino adoptó decisiones que le impidieron aprovechar cualquier viso de oportunidad que la limitada mediación estadounidense pudo proporcionarle: la asunción de Mario Benjamín Menéndez como gobernador militar de las Islas¹⁰⁶, la declaración de la integración “definitiva” del archipiélago, la exigencia de reconocimiento de soberanía y la entrega de las islas antes de fin de año como precondiciones para la negociación. Fue así que en pocos días, el gobierno se vio ante una situación totalmente distinta a la prevista, pero ello no bastó para que se modificara el rumbo tomado.

Fue hacia mediados de abril que uno de los presupuestos principales de los que había partido la Junta para asegurar el éxito de su plan se demostraba erróneo. Gran Bretaña había obtenido rápidamente el apoyo tanto de la Comunidad Económica Europea (CEE) – que, al igual que el *Commonwealth*, impuso sanciones económicas a la Argentina – como el del Consejo de Seguridad de la ONU, quien a través de la Resolución 502 (3 de abril de 1982) había calificado a la Argentina de “primer agresor” y ordenaba el cese de las hostilidades, el retiro de las fuerzas argentinas y el

¹⁰⁴ Diarios Clarín y La Nación. 10 de abril de 1982.

¹⁰⁵ Cardozo, Kirchbaum, Van Der Kooy. Op. Cit. Pág. 154.

¹⁰⁶ La ceremonia de asunción tuvo una gran significación simbólica y una importante repercusión doméstica, acrecentada por la presencia de políticos, empresarios, sindicalistas, representantes religiosos y militares.

inicio de negociaciones para resolver el conflicto pacíficamente¹⁰⁷. Sin embargo, lo realmente inesperado estaba por venir. El 15 de abril, y luego de infructuosos intentos por hacer que ambas partes alcanzaran un acuerdo (entre los que se cuentan las visitas de Haig a ambos países), Estados Unidos decidió tomar partido. Luego de firmar la Resolución 502 en su carácter de miembro del Consejo de Seguridad, y de haber autorizado a Inglaterra a utilizar la Isla de Ascensión en el Atlántico como base logística, el gobierno norteamericano decidió, para sorpresa de los integrantes de la Junta, apoyar política y materialmente al Reino Unido y aplicar sanciones económicas a la Argentina. Para la “traicionada” Junta, Estados Unidos era ahora el responsable de la imposibilidad de llegar a un acuerdo pacífico con Gran Bretaña, y lo acusó de ser el causante de que las cosas llegaran tan lejos, al haber inclinado la balanza con su actitud.

El 25 de abril, Inglaterra demostró erróneo el segundo de los presupuestos de la Junta. Ese día, un grupo de las fuerzas de tareas británicas abrió fuego sobre Grytviken, en las islas Georgias del Sur. Dos horas después de iniciado el ataque, el Grupo Alfa allí apostado enarbolaba la bandera blanca y se rendía casi sin haber presentado resistencia¹⁰⁸. Se habían iniciado las hostilidades. El conflicto en las Malvinas había llegado a un punto sin retorno. A pesar de que los intentos por solucionar diplomáticamente el conflicto continuarían en el marco de los organismos internacionales – ONU, OEA -, repentinamente se hizo evidente que la guerra era ya la única solución viable para resolver una cuestión que se había supuesto de fácil y exitosa ejecución, resolución y definición.

¹⁰⁷ La Resolución 502 contó con el voto favorable de 10 países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Japón, Jordania, Togo, Uganda, Zaire y Guyana. A pesar de respaldar la soberanía argentina en Malvinas, los miembros de los países no alineados, por diferentes razones, también respaldaron la resolución. La Unión Soviética, Polonia, China y España se abstuvieron. Solo Panamá fundamentó un proyecto de apoyo a la Argentina.

¹⁰⁸ En una primera instancia, la Junta negó abiertamente la rendición de las fuerzas apostadas en las Islas Georgias: “... los detalles de las versiones difundidas desde Londres sobre la presunta rendición de la totalidad de los efectivos a cargo de la defensa de la isla de San Pedro son absolutamente falsos” (Comunicado N° 33); y agregó que cualquier información de este tipo sólo era una “... acción de propaganda... parte de una campaña desatada por Gran Bretaña con el fin de confundir a la opinión pública internacional, satisfacer necesidades de su política interna, influir en los foros internacionales donde se está debatiendo la crisis del Atlántico Sur y tratar de disminuir la voluntad argentina” (Comunicado N° 34).

La Guerra, la derrota... la caída.

Las hostilidades entre Argentina y Gran Bretaña se abrieron el 1 de mayo. Había empezado la “Guerra de Malvinas”. Un día después, ocurrió lo que debió haber sido un llamado de atención para el gobierno. En medio del cauto clima triunfalista que aún se vivía en el país, empezaron a escucharse evidentes reclamos contra la guerra y por la falta de información. El 26 de abril, en Plaza de Mayo, unas 10.000 personas se manifestaron en contra del gobierno a través de consignas como *“Malvinas si, proceso no”*, *“levadura, levadura apoyamos las Malvinas, pero no la Dictadura”* y *“Aserrín, Aserrán que se vaya Alemán”*.¹⁰⁹ Esto demostraba que más allá de las manifestaciones y actos realizados en apoyo y defensa de la soberanía argentina en las islas¹¹⁰, y de las periódicas reuniones entre el Ministro del Interior Gral. Alfredo Saint Jean y los dirigentes políticos para informarles sobre las negociaciones y sus probables consecuencias y derivaciones, las incesantes críticas y reclamos económicos, sociales y políticos persistían. Los familiares de desaparecidos retornaron a sus marchas de reclamo frente a la Casa de Gobierno, y entidades gremiales como la CGT y la CNT continuaron con sus críticas al modelo económico y al Programa de Privatizaciones de Empresas Estatales. Estas críticas se agudizaron, si era posible, cuando Alemann delineó un plan de “economía de emergencia” que incluía una nueva devaluación, un aumento de los precios de la nafta, y la reducción de la garantía bancaria. Por su parte, la Multipartidaria retomó sus reclamos políticos por una participación nacional en las decisiones de gobierno, y el dirigente Raúl Alfonsín convocó a un Plenario del Comité Nacional de la UCR y comenzó a hacer públicos sus

¹⁰⁹ Diario Clarín. 27 de abril de 1982.

¹¹⁰ Hacemos referencia a manifestaciones tales como: el “Encuentro Artístico Nacional por la Paz y la Soberanía Islas Malvinas” llevado a cabo por integrantes del mundo artístico y cultural argentino el 4 de mayo en el Luna Park; la conformación de un “Fondo Patriótico Malvinas Argentinas”; el maratón de 24 hs. de transmisión realizada por ATC para nutrir el Fondo Patriótico, que recaudó más de 22.000 millones de pesos; el acto realizado el 12 de Mayo por el peronismo en el Estadio de la Federación Argentina de Box; el acto popular de Plaza de Mayo realizado el 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, entre otros.

pedidos en favor de la entrega de la presidencia a un civil (el ex – presidente Illia) por parte de un gabinete de “Salvación Nacional”.

Era evidente que el conflicto bélico no había sido capaz de acallar los reclamos político-sociales de la población, cada vez más persistentes. Fue por ello que el gobierno anunció que finalmente para el 30 de junio se daría a conocer el tan postergado “Estatuto de los Partidos Políticos”, y aseguró que se reconocería a los partidos cuyo número de afiliados alcanzase el 4 por mil del padrón electoral. Para ello, distribuyó 350.000 fichas de afiliación en los juzgados electorales. Y paso seguido, dispuso una nueva liberación de presos políticos, en este caso como muestra de adhesión a la visita que el Papa Juan Pablo II realizaría al país a causa del conflicto, programada para el 11 de junio.

Con el Papa en la Argentina, empezó la fase última de la guerra, con la avanzada final del ejército inglés sobre las fuerzas argentinas. El 12 de junio, mientras dos millones de personas oraban por la paz junto al Papa, en las islas se producían violentos combates que desbarataron a las últimas fuerzas nacionales de resistencia. Dos días después, la defensa argentina quedaba totalmente desarticulada y los efectivos argentinos recibieron la orden de alto el fuego, mientras el Gral. británico Jeremy Moore iniciaba las conversaciones con Menéndez que pondrían fin a la Guerra de Malvinas.

En el continente, la noticia de la derrota fue dada a conocer a través de un breve comunicado, el 164, por el cual el Estado Mayor Conjunto comunicaba oficialmente que “... *el Comandante de las Fuerzas de Tareas Británicas, Gral. Moore y el Gobernador Militar de las Islas Malvinas, Gral. de Brigada Mario Benjamín Menéndez... acordar(on) las condiciones de cese el fuego*”. El día 15, los diarios y restantes medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y la incredulidad y desazón inundó a un pueblo que hasta el día anterior se creía victorioso, ignorante absoluto de cual era la verdadera situación en las islas¹¹¹.

¹¹¹ Para evitar que posibles reveses en el desarrollo de los acontecimientos hicieran sonar más fuertes las voces de disenso social que “*información intencionada y deformada convenientemente*” (Comunicado del 28 de abril) pudiera provocar, la Junta elaboró un “Acta sobre Control de Información por Cuestiones de Seguridad”, que permitió una importante manipulación de la información por parte del Gobierno Argentino. La misma, dada a

En el momento mismo de la derrota comenzó el derrumbe definitivo del PRN encabezado por Galtieri. La gente salió a las calles buscando una explicación de lo sucedido, pero nunca recibió una respuesta de parte de los responsables. Y Galtieri, enajenado de los ánimos populares, no renunció de inmediato y solo pensaba que su lugar continuaba estando al frente del Ejecutivo. Sin embargo, algunos de los miembros del régimen más criticados en el desempeño de sus funciones decidieron dar un paso al costado para tratar de calmar los ánimos de la población: el Canciller Costa Méndez, el Ministro de Obras Públicas Sergio Martín y el Ministro de Economía Roberto Alemann presentaron su renuncia. Ante las circunstancias dadas, el 17 de junio el Ejército observó la necesidad de remover a Galtieri y quitarle el derecho a designar un sucesor. Sólo obtuvo concesión en algunos aspectos meramente formales, como entregar personalmente la Comandancia del Ejército y la Presidencia a su reemplazante interino, el Ministro del Interior Alfredo Saint Jean.¹¹²

En la cúpula militar se generalizaron el estado de vigilia y se acentuaron las tendencias facciosas. Pero las Fuerzas en conjunto entendían que la guerra de Malvinas le había dado el golpe de gracia a un Proceso que con la derrota ya no tenía razón de ser. El plan ideado para revitalizar un desgastado y rechazado proceso militar, fue el mismo que lo condujo a su derrumbe definitivo. Del 18 al 21 de junio la Junta y los altos mandos de las Fuerzas Armadas se mantuvieron en estado deliberativo permanente tratando de decidir que curso de acción tomar. Finalmente, decidieron que el Proceso debía terminar en 1984 y que se acordaría con la dirigencia política el plan para la transición. El Ejército no quiso aceptar civiles o giros nacionalistas en la economía (lo que constituía la propuesta de la Armada) y además pretendía que los otros comandantes involucrados en la guerra se retiraran, en señal de que las responsabilidades eran compartidas. Ante la

conocer el 1° de mayo en coincidencia con los primeros ataques británicos en las islas, establecía rígidas pautas de control de información (“... evitar difundir información que: produzca el pánico, atente contra la unidad nacional, reste credibilidad y/o contradiga la información oficial, socave la convicción sobre los derechos argentinos, pueda generar disturbios sociales...” y apuntaba a la no divulgación de información que “... sin provenir de fuente oficial, se refiera a operaciones militares... (o que) sin previa autorización del Estado Mayor Conjunto, haga referencia a unidades militares, equipos y/o personal militar...”. Clarín 1 de mayo de 1982.

¹¹² Cardozo, Kirchbaum, Van Der Kooy. Op. Cit.

falta de acuerdo en torno a estos puntos y sobre quien sería elegido para suceder a Galtieri en el poder, la Armada y la Aeronáutica anunciaron su retiro de la Junta. El 24 de junio, el Ejército en soledad designó al General (R) Reinaldo Bignone para que completase a partir del 1 de julio la institucionalización del país, a más tardar en marzo de 1984. El poder militar estaba en flagrante descomposición, y a partir de allí, todo el PRN se descalabró por completo.

El gobierno de Bignone, con el único apoyo del Ejército, fue un débil gobierno de transición que quedó a cargo de capear la crisis, de negociar con las fuerzas políticas, de establecer la mejor salida legal que fuera posible a las Fuerzas Armadas del poder¹¹³ y de crear las condiciones electorales para la llegada de un nuevo gobierno democrático. En sus manos quedó la organización de los funerales del Proceso, y así era entendido por él mismo: *“Mi mayor ambición... es entregar en orden el gobierno y el país al presidente constitucional que me suceda, y que ese presidente constitucional... pueda despedir en mi al último presidente de facto de la historia y del futuro argentino”*¹¹⁴

Conclusión.

A lo largo de las páginas precedentes hemos abordado las causas mediatas e inmediatas que condujeron a uno de los episodios más turbios de la historia argentina: los que condujeron a la ocupación de las Islas Malvinas por las Fuerzas Armadas el 2 de abril de 1982. El mismo día del desembarco, el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe del Ejército General Leopoldo Fortunato Galtieri le afirmaba al pueblo argentino que la decisión no obedecía a *“...cálculo político alguno...”*, sino que se había tomado *“... en nombre de todos y cada uno de los argentinos, sin distinción*

¹¹³ Entre ellas se incluyeron: el “Documento Final” (abril/1983) en donde se fijaba la posición de las FF.AA. frente a las violaciones a los derechos humanos; el “Acta Final”, que establecía que todas las operaciones llevadas a cabo por las FF.AA. eran consideradas actos de servicio y que por lo tanto no eran punibles; la “Ley de Pacificación Nacional” (Ley de Autoamnistía) por la que se otorgaba inmunidad tanto a los sospechosos de actos de terrorismo estatal como a todos los miembros de las Fuerzas por crímenes cometidos entre 1973 y 1982; y el “Decreto de Destrucción de Documentos referidos a la Represión Militar”.

¹¹⁴ Bignone. La Nación. 27 de Agosto de 1982. Pág. 16. “Texto del Mensaje del Presidente”

de sectores o banderías y con la mente puesta en todos los gobiernos, instituciones y personas que en el pasado, sin excepciones y a través de 150 años, han luchado por la reivindicación de nuestros derechos".¹¹⁵ Todo lo contrario. No se trató de una cuestión de patriotismo o anhelo de hacer justicia histórica, sino que respondió simple y llanamente a una cuestión de orden político para salvar a un Proceso militar desgastado, cuestionado y sumergido en una de las peores y más profundas crisis que la historia argentina había conocido hasta ese momento.

Amenazada su continuidad en el poder por más tiempo, el sector de los militares "duros" de la cúpula de poder idearon un plan estratégico militar para poder alcanzar, en forma inmediata e indefectible, un objetivo de orden político: ganar para el PRN el apoyo popular del que carecía, generar un nuevo consenso social en relación a la necesidad de su permanencia y continuidad en el poder, y relegitimar un altamente repudiado proyecto político económico de país. Ese plan giró en torno a una reivindicación profunda y largamente arraigada no solo en la nacionalidad del pueblo argentino, sino también en las aspiraciones de los "señores de la guerra" de las Fuerzas Armadas: la recuperación de las Islas Malvinas a la integridad territorial del país.

Hacia 1981, el Proceso de Reorganización Nacional atravesaba una crítica situación que hacía mella en todos sus órdenes - el económico, el social y el político - y que se aparecía como absolutamente irreversible. El gran desgaste que había experimentado el régimen militar imposibilitaba la dilatada prosecución de los objetivos fundamentales del Proceso, aquellos plateados con el golpe de Estado de 1976 y aún no concretados, y a los que evidentemente los militares no estaba dispuestos a renunciar para - al decir del General Galtieri - "regresar a los cuarteles sin haberlos alcanzado". Marcos Novaro y Vicente Palermo mencionan que, a principios de la década del '80, resultaba evidente que *"...la vigencia del régimen se justificaba no ya en virtud del logro de sus objetivos, sino de su incumplimiento"*.¹¹⁶ Esta

¹¹⁵ Diario Clarín. 3 de abril de 1982.

¹¹⁶ Novaro, Palermo. Op. Cit. Pág. 382.

era una realidad reconocida por los propios integrantes de la corporación militar, a quienes además ya no les quedaba más remedio que admitir que “... se había llegado a un momento en que no estaban dadas las condiciones para revitalizar el Proceso...”¹¹⁷. Fue por ello que parecía no quedar otra opción más que crear dichas condiciones. Y la “Cuestión Malvinas” apareció a los miembros de la cúpula militar como una tentadora alternativa que, propiciamente canalizada, podía allanar el camino para resolver todos y cada uno de los problemas internos que azotaban al régimen.

El tema “Malvinas” se prefiguró como el “conflicto perfecto” para intentar rescatar a un gobierno en crisis. La cuestión del reclamo de la soberanía sobre el archipiélago malvinense formaba parte del imaginario popular desde antaño, un reclamo que – desde el momento mismo de su ocupación por parte de los ingleses en 1833 - fue parte constitutiva de Argentina como Nación y de los argentinos como pueblo soberano. Era indudable que una acción que apelara a ese anhelo de devolverle al país lo que, intrínsecamente, sentía como propio y usurpado durante casi 150 años, tenía la capacidad de lograr un apoyo inmediato y una unanimidad indiscutible para aquellos que la llevaran a cabo, permitiría reivindicar la función de las Fuerzas Armadas y su rol al frente del Estado, y fortalecería su posición a nivel internacional. Y esto era lo que buscaba lograr un régimen militar que, infructuosamente, buscaba capear una crítica situación interna de la que parecía no haber retorno.

En este sentido, el año 1981 parece ser un punto de inflexión para el Régimen Militar, ya que fue el momento en el que la profunda crisis por la que atravesaba se manifestó en toda su plenitud. En el plano económico, el plan adoptado años antes por Martínez de Hoz, y que ciertos sectores militares y empresarios tenían la intención de perpetuar, había conducido a la economía argentina a un callejón sin salida, que solo podía hacerse más oscuro: un enorme déficit fiscal, una deuda externa sin precedentes, caída de la tasa de inversión y de los salarios reales, recesión, aceleración

¹¹⁷ Palabras de un vocero oficial del Ejército al diario La Nación, 15 de diciembre de 1981. Pág. 1.

deliberada de la inflación, y una ola de quiebras con sus obvias consecuencias sociales: una constantemente acrecentada tasa de desocupación. Políticamente, el PRN aparecía a los ojos de los argentinos como un régimen que ya no tenía razón de ser. Las divergencias cada vez más obvias en las propias filas de la corporación militar y los constantes cuestionamientos a su legitimidad para permanecer en el Estado, sumado al altamente resonante reclamo por los desaparecidos y los desoídos llamados a la democratización del país de los sectores opositores políticamente relevantes, condujeron a que la legitimación del Proceso se encontrara agotada, incluso frente a buena parte de quienes le habían brindado inicialmente su apoyo. Sumado a ello, el aumento irrefrenable de la tensión social, de las huelgas, movilizaciones y manifestaciones en contra del régimen y de la situación económica, a las que ahora se agregaban las de las principales entidades empresarias disconformes con la situación de sus sectores, amenazaba con convertirse en un incontrolable desborde nacional y popular – evidencia de lo cual terminó siendo la movilización del 30 de marzo de 1982 – que conducirían a la caída inexorable del régimen militar. Todos estos eran factores que la Junta consideraba debía poner rápidamente bajo control.

Con el General Viola al frente del Ejecutivo, hubo tímidos intentos de encontrarle una salida a la crisis y apuntar a la institucionalización del país. Sin embargo, el rumbo tomado por el Presidente de facto en cuestiones políticas y económicas indicaba una orientación totalmente contraria a la esgrimida por el sector “duro” de las Fuerzas, lo que limitó su capacidad de acción. Alianzas intramilitares comenzaron a gestarse por oposición a la figura de Viola, que tuvieron como protagonistas a aquellos militares convencidos de que para revitalizar al PRN era necesario retornar a los presupuestos básicos del mismo, en lugar de alejarse de ellos. Revelando la profundidad de los conflictos y contradicciones al interior de las Fuerzas, y en un marco de creciente aceleración de la crisis económica y aumento de la tensión social y política, uno de los más duros entre los duros, el General Galtieri, terminó constituyéndose en el “cabecilla” del golpe palaciego por el

cual Viola fue desplazado del Gobierno. Para aquel y los que lo rodeaban, la solución a la crítica situación que atravesaba el régimen se encontraba en un retorno, no a la democracia, sino a los principios básicos del proyecto de país que ellos mismos implementaron en marzo del '76. Y el camino que posibilitaría alcanzar esos incumplidos objetivos, no sería ya el abierto por la lucha y victoria sobre la subversión, sino la lucha y victoria sobre ese "enemigo" externo con el que se había venido luchando pacífica, pero infructuosamente durante décadas: Gran Bretaña. De esta manera, la solución que encontró la conducción militar para frenar y congelar la creciente oposición y críticas a su permanencia en el Estado de producir una circunstancia significativa que revitalizara al PRN: en este caso pasaba por la recuperación de las Islas Malvinas mediante una operación de desembarco de tropas que forzase a Gran Bretaña a dirimir la cuestión en forma definitiva.

La opción de recuperar la legitimidad perdida ante la sociedad, y/o desviar la atención de problemas internos que una administración enfrenta mediante un conflicto bélico externo, siempre fue una salida para gobiernos que atraviesan coyunturas críticas, de las que hay más de un ejemplo, inclusive en la actualidad. Y Malvinas es un caso más entre ellos. En un principio, y en su condición de "conflicto perfecto", el plan de recuperar militarmente el archipiélago austral, se constituyó en una carta política utilizada primeramente por la Armada– cuya aspiración de llevarlo a cabo databa de 1968 – para negociar su apoyo a Galtieri en la remoción de Viola y los "blandos" del Ejecutivo. Si bien en anteriores ocasiones las condiciones políticas y estratégicas para llevarlo a cabo no fueron consideradas propicias; la crítica situación por la que atravesaba el régimen en el período 1981-1982 hizo que las condiciones estuvieran dadas de por sí. Bajo la promesa de concretar un plan durante mucho tiempo y en numerosas ocasiones descartado, Galtieri recibió el apoyo del Comandante en Jefe de la Armada para ocupar la Presidencia de la Nación, y desde ese lugar, concretar los objetivos políticos aún no alcanzados. Y Malvinas creó las condiciones necesarias para hacerlo.

Esto pone de manifiesto que planes en relación a la posible ocupación de las Islas comenzaron a delinearse tiempo antes de la asunción de la tercera Junta Militar encabezada por el General Galtieri: mientras este último tejía sus redes de apoyo para ejecutar el “autogolpe” que lo llevaría al poder en diciembre de 1981, el Almirante Anaya aprovechaba la oportunidad concreta que se le perfilaba en el horizonte para comenzar a trazar los lineamientos de un plan que se aparecía como la respuesta a todos los problemas del PRN, sobre todo el de cómo concretar su continuidad.

Una vez en el poder, para la nueva Junta de Gobierno – integrada por Galtieri, el Comandante en Jefe de la Armada Almirante Anaya y el Brigadier General de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo - la posibilidad de recuperar las Malvinas apareció como la única opción que cumplía con todos los requisitos para convertirse en la solución perfecta de revitalizar al régimen, y permanecer largo tiempo dirigiendo los destinos del país. En el largo plazo, la opción “Malvinas” tenía la capacidad de satisfacer las aspiraciones “nacionalistas” y geoestratégicas que la Junta tenía para una “Argentina Potencia”: recuperar posiciones en el Atlántico Sur frente a la indefectible pérdida del Canal del Beagle a manos chilenas, y “fortalecer” su posición como potencia regional en Latinoamérica. En el corto, proporcionaría los medios para lograr la unidad nacional y el consenso social que revertirían el fuerte cuestionamiento que sufría el Régimen y permitiría que la sociedad política y civil “volviera a creer” en un devaluado Proceso.

Así, el plan se configuró como una estrategia político militar para, por un lado, retardar los reclamos de una salida electoral y neutralizar el creciente malestar social que generaba la situación económica; y por otro, sentar las bases consensuales para crear una fuerza de apoyo al gobierno, una fuerza política que soportara la candidatura del presidente de facto para transformarlo en presidente constitucional, y encabezar un régimen cívico-militar heredero legítimo y continuador del PRN. Pero además, el plan tenía unpreciado condimento extra: al disponerse el uso de la fuerza militar para su ejecución, serviría para revalidar el papel de las Fuerzas Armadas; pero como las islas serían tomadas por la fuerza simplemente para forzar una

definitiva negociación con Gran Bretaña, no sería necesario combatir y sufrir las consecuencias inherentes a un conflicto bélico de mayor envergadura. Así, para los integrantes de la Junta, Malvinas era, en cierto modo, el instrumento perfecto para lograr el reconocimiento necesario no solo para ellas mismas, sino para su modelo de país, y camino para lograr su aspiración política ulterior: su continuidad y el de su proyecto político en el poder.

Basándose en consideraciones adoptadas por la Armada en años anteriores, los planes concretos de ocupación comenzaron a perfilarse en diciembre de 1981, con la asunción de Galtieri como presidente. Tomando precauciones en diferentes planos – el político, el ideológico y el militar – y de la mano del Ministro de Relaciones Exteriores, el Canciller Costa Méndez, Argentina endureció su política exterior en relación al tema de la soberanía en las Islas Malvinas, en el marco del revés sufrido en la Cuestión del Canal del Beagle, mientras delineaba un plan militar alternativo a la estrategia diplomática.

El plan elaborado por el Equipo de Trabajo designado a tales efectos a principios de enero de 1982, no podía fallar. Resultaba lógico y sencillo. En caso de que las próximas negociaciones diplomáticas con Gran Bretaña de fines de febrero resultaran infructuosas en el corto plazo, se procedería a la ocupación militar de las Islas. Pensando en ejecutar el operativo hacia 1983 – año del 150 aniversario de la “usurpación británica” –, el mismo contemplaba el desembarco en las Malvinas, la proclamación de la recuperación irrevocable por parte de la Argentina, y retomar las negociaciones diplomáticas con una Gran Bretaña que, reacia a continuar con las conversaciones, debería aceptar el “hecho consumado”. Según las consideraciones de los militares argentinos, a esta última no le quedaría más remedio que aceptar que en lo que a la soberanía de las Malvinas se refería, un tema que sin duda el Reino Unido no tenía como prioritario en su agenda, ya no había marcha atrás y que sólo quedaba definir de una vez y para siempre una cuestión que había sido dilatada por demasiado tiempo. Por su parte, Argentina se vería beneficiada por la intervención de los

Estados Unidos, quien mediaría en las negociaciones, haciendo de justo árbitro entre sus dos mejores aliados. Así, la cuestión se vería finalmente dirimida para satisfacción de todos, y sobre todo para la del Régimen Militar Argentino, quien se aseguraría el apoyo indiscutible del pueblo por haberse hecho cargo de una histórica reivindicación popularmente sentida; y una aceptación indiscutida de su permanencia en el poder, gracias a la nueva legitimidad que el consenso social generados en torno a la recuperación de las islas le daría.

Si bien, en un comienzo el plan de ocupación carecía de una fecha específica de ejecución, la acelerada profundización en los primeros meses de gobierno de Galtieri de la crisis económica, la agudización de las tensiones sociales que amenazaban con conducir en un futuro inmediato a un estallido popular – que finalmente se produciría el 30 de marzo, en lo que fue la manifestación más importante y más brutalmente reprimida de los últimos seis años - , las constantes críticas a los planes político económicos del gobierno y los insistentes llamados a la institucionalización del país, hicieron imperioso recurrir a los planes existentes en el corto plazo, para poder así alcanzar el objetivo político: revitalizar y dar larga vida el PRN. A ello respondieron los mensajes subliminales – y no tanto - de diferentes integrantes del régimen durante los primeros meses del año, el mensaje no tan encubierto del comunicado dado a conocer el 2 de marzo de 1982 y el manejo que se hizo de los sucesos en las Georgias del Sur a mediados del mismo mes, detonante final y factor generador último del conflicto que la Junta venía buscando. De esta manera, la Junta se valió de las circunstancias que se le presentaron con la “Crisis de los Chatarreros” para ejecutar un plan que, de no haber estado tan adelantado en marzo de 1982, hubiera sido definitivamente imposible de llevar a cabo.

Sin embargo, por adelantados que estuvieran, los planes de la Junta habían sido pensados a partir de erróneos presupuestos de apreciación. Su plan “lógico y sencillo” partió de la base de la importancia dada a preceptos totalmente falaces. En primer lugar, y como pronto se hizo evidente, Inglaterra nunca estuvo dispuesta a negociar, y reaccionó exactamente

como se supuso jamás haría: militarmente. Asumido en 1979, el Gobierno de Margaret Thatcher pugnaba, en 1982, por consolidarse internamente. Ante la sorpresiva realidad de la presencia argentina en las islas, lograr una victoria segura y definitiva se convirtió para el gobierno británico en un objetivo tan indispensable políticamente como para el Gobierno Argentino. Fue así que la Administración Thatcher se valió del conflicto que se le presentó de la misma manera que la Junta planeó hacerlo, y asimismo buscó canalizarlo políticamente para lograr objetivos similares a los que tenían los militares argentinos cuando buscaron una “fuga hacia adelante” con la “aventura” militar en el Atlántico Sur.

En segundo término, la Junta percibió erróneamente la importancia estratégica que Argentina verdaderamente tenía para la política exterior de Estados Unidos, conduciendo a la primera a presuponer que el segundo mediaría en el conflicto e impediría que las partes llegasen a un enfrentamiento armado. Y en el improbable caso en el que se llegase a esa instancia, se estimó que Washington apoyaría al país, o al menos se limitaría a permanecer neutral, en retribución por la colaboración argentina en la “guerra sucia” norteamericana en América Central. Pero el gobierno norteamericano, ante la imposibilidad de lograr que ambos gobiernos llegasen a un acuerdo, se inclinó por su socio y aliado en la OTAN, fundamentando su decisión en lo resuelto por la resolución 502.

Fue en base a ello que el plan elaborado por la Junta contempló una limitada operación militar que no iba más allá de considerar un desembarco de tropas en Malvinas. Es decir, bajo los presupuestos anteriores, que asegurarían un éxito “seguro, rápido y no costoso”, consideraciones de otro tipo evidentemente resultaban innecesarias. Nunca se pensó, ni remotamente, en la posibilidad de que fuera la guerra y no la diplomacia la que pusiera fin a la cuestión. Y al no prever dicha posibilidad, el gobierno militar careció de un “plan B”, es decir, no se preparó para las contingencias de una guerra efectiva. Y cuando el “plan B” fue necesario, improvisó sobre la marcha en todos los frentes que tenía que cuidar: el externo (militar y diplomático) y el interno. Con respecto a este último, era indispensable no

perder la ilusión de consenso social y aceptación política que el gobierno creyó encontrar en las muestras de algarabía de parte del pueblo argentino por la recuperación de las islas. La Junta confundió el apoyo indiscutible a la recuperación del territorio nacional perdido llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, con apoyo unánime e incuestionable al gobierno militar y a sus miembros por parte de todos los sectores de la sociedad.

Y así, la guerra terminó siendo el resultado no planeado ni deseado para un régimen que, buscando salir de una crisis que se aparecía como irreversible, se encontró con un desenlace absoluto y totalmente opuesto al buscado inicialmente: el fin del PRN. El rotundo fracaso del plan de Galtieri solo sirvió para agudizar la crisis económico-social y la fragmentación del poder de las Fuerzas Armadas, profundizar la oposición y cuestionamiento político y civil al régimen y hacer inevitable la disolución de un Proceso Militar que había fracasado, incluso en crear las condiciones para perpetuar su propia existencia.

Bibliografía.

- **Abos, Alvaro.** Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983). Centro Editor de América Latina (CEAL) Buenos Aires. 1984.
- **Acuña, Carlos; Smulovitz, Catalina.** “Ajustando las Fuerzas Armadas a la democracia. Las Fuerzas Armadas como actor político en la experiencia del Cono Sur”. Agora N° 5. Invierno de 1996.
- **Altamirano, Carlos.** “Lecciones de una Guerra”. Punto de Vista. V.1. Agosto-octubre. 1982.
- **Armony, Ariel.** Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central. (1977-1984). Universidad de Quilmes. 1999.
- **Balcedo, Antonio.** Miedos, Broncas y Esperanzas. Mirando el país desde el sindicalismo (1979-1993). Editorial Corregidor. 2000.
- **Balza, Martín.** (General). Malvinas. Gesta e Incompetencia. Editorial Atlántida. 2003.
- **Bartolomé, Mariano.** El Conflicto del Atlántico Sur. Una perspectiva diferente. Círculo Militar. Buenos Aires. 1996.
- **Carballo, Liliana; Charlier, Noemí; Garulli, Liliana.** La dictadura (1976-1983). Testimonios y Documentos. Eudeba. 1996.
- **Cardozo, Oscar Raúl; Kirchbaum, Eduardo; Van Der Kooy, Eduardo.** Malvinas. La trama secreta. Buenos Aires. Planeta. 1992.
- **Cavarozzi, Marcelo.** Autoritarismo y Democracia. 1955-1983. Centro Editor de América Latina. 1987.
- **Cisneros, Andrés; Escudé, Carlos.** “La Política Económica del Proceso de Reorganización Nacional”. En Historia General de las Relaciones Exteriores de la Argentina. 1806-1989. 2000.
<http://www.argentina-rree.com/11/11-063.htm>

- **Cisneros, Andrés; Escudé, Carlos.** “Las relaciones con Estados Unidos”. Ibidem. <http://www.argentina-rree.com/14/14-043.htm>
- **Costa Mendez, Nicanor.** Malvinas. Esta es la Historia. Editorial Sudamericana. Bs. As. 1993.
- **Dabat, Alejandro.** Cuestión Malvinas y Crisis Nacional. Teoría Política. 1982
- **De Riz, Liliana.** “Argentina: ni democracia estable ni régimen militar. Conjeturas sobre las perspectivas para la democracia”. En Oscar Oszlak, Proceso: crisis y transición democrática/2. CEAL. 1984.
- **De Vita, Alberto.** Malvinas/82. ¿Cómo y Por qué?. Instituto de Publicaciones Navales. Buenos Aires. 1994.
- **Del Carril, Bonifacio.** La Cuestión de las Malvinas. Hyspamérica. Bs. As. 1986.
- **Delich, Francisco.** “Desmovilización Social, reestructuración obrera y cambio social”. En Peter Waldman y Ernesto Garzón Valdez (comp.). El poder militar en la Argentina (1976-1981). Buenos Aires. Galerna. 1983.
- **Duhalde, Eduardo Luis.** El Estado Terrorista Argentino. Quince años después. Una mirada crítica. Eudeba. 1999.
- **Equipo The Sunday Times.** La Guerra de Malvinas. Londres Editorial Argos Vergara. 1983.
- **Escudé, Carlos.** “Contenido nacionalista de la enseñanza de la geografía en la República Argentina. 1879-1986”. 2000. www.argentina-rree.com/documentos/contenidos_nac.htm.
- **Fontana, A.** Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina. Estudios Cedes. 1984.
- **Freedman, Lawrence; Gamba-Stonehouse, Virginia.** Señales de Guerra: el conflicto de las Islas Malvinas de 1982. Buenos Aires. Javier Vergara. 1992.

- **Gerchunoff, Pablo; Llach, Lucas.** El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Ariel. 1998.
- **Guber, Rosana.** ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda. Fondo de Cultura Económica. México. 2001.
- **Guglielmelli, Juan. Gral. Div. (R).** “Malvinas, la Guerra en el Atlántico Sur”. Revista Estrategia. 71-72. Abril- Septiembre 1982.
- **Gutierrez Contreras, J.C.; Villegas Diaz, Myrna.** “Derechos Humanos y desaparecidos en Dictaduras Militares”. www.nuncamas.org/investig/investig.htm.
- **Informe Rattenbach.** El Drama de las Malvinas. Editorial Espartaco. Bs. As. 1988.
- **Lobato, Mirta Zaida; Suriano, Juan.** Nueva Historia Argentina. Atlas Histórico de la Argentina. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 2000.
- **Mesyngier, Luis.** La política implícita. Instrumentos económicos y transformación social en la última dictadura. Eudeba. Buenos Aires. 1998.
- **Mignone, Emilio.** Derechos Humanos y Sociedad. Edit. CELS. Buenos Aires. 1991.
- **Muñoz, Jorge.** Civiles por Malvinas. Ediciones Cruz del Sur. 1984.
- **Novaro, Marcos; Palermo, Vicente.** La dictadura militar. 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática. Editorial Piados. 2003.
- **Paz, Pedro.** “Los Militares en el poder y la nueva política económica”. En Eduardo Jozami, Pedro Paz, Juan Villarreal, Crisis de la Dictadura Argentina. Política Económica y Cambio Social (1973-1986). Siglo XXI Editores. 1985.
- **Poce, Julio.** Historia no oficial de la Dictadura del Proceso. Sus antecedentes y consecuencias. Graficar. La Plata. 2002.
- **Potash, Roberto.** El Ejército y la Política en Argentina. 1962-1973. Segunda Parte. Editorial Sudamericana. Bs. As. 1994.

- **Poting, Clive.** El Derechos Saber. La Historia secreta del hundimiento del Belgrano. Editorial Atlántida. 1986.
- **Pozzi, Pablo.** Oposición obrera a la dictadura. Editorial Contrapunto. Colección Memoria y Presente. 1987.
- **Quelet, Ricardo Luis (Vicecomodoro).** Historia Política de las Malvinas. Escuela Superior de Guerra. 1982.
- **Romero, Luis Alberto.** Breve historia contemporánea de la Argentina. Fondo de Cultura Económica. 2001.
- **Rozitchner, León.** Malvinas: de la Guerra Sucia a la Guerra Limpia. Biblioteca Política Argentina. CEAL. Buenos Aires. 1985.
- **Russell, Roberto.** "El Proceso de toma de decisiones en la política exterior argentina. (1976-1989). En Russell, Roberto. La política exterior y toma de decisiones en América Latina. GEL. Buenos Aires. 1990.
- **Russell, Roberto.** "Marchas y Contramarchas de la política exterior del proceso: los gobiernos de Viola, Galtieri y Bignone (1981-1983)". En Jalebe, Silvia Ruth (comp.), La política exterior argentina y sus protagonistas (1880-1995). CARI/GEL. Colección Estudios Internacionales. 1996.
- **Schneider, Alejandro.** "Ladran Sancho... Dictadura y Clase Obrera en la zona Norte del Gran Buenos Aires". En Camarero, Hernán; Pozzi, Pablo; Schneider, Alejandro. De la Revolución Libertadora al Menemismo. Historia Social y Política Argentina. Imago Mundi. 2000.
- **Schvarzer, Jorge.** La política económica de Martínez de Hoz. Hyspamérica. 1986.
- **Seoane, María; Muleiro, Vicente.** El Dictador. La Historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla. Editorial Sudamericana. Editorial Piados. 2003.
- **Sidicaro, Ricardo.** La política mirada desde arriba. Las ideas del Diario La Nación. (1909-1989). Editorial Sudamericana. 1993.

- **Spitta, Arnold.** “El proceso de reorganización nacional de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica”. En Peter Waldman y Ernesto Garzón Valdéz (comp.), El poder militar en la Argentina (1976-1981). Buenos Aires. Galerna. 1983.
- **Troncoso, Oscar.** El Proceso de Reorganización Nacional. Cronología y Documentación/1. CEAL. 1984.
- **Vazquez, Enrique.** PRN. La última. Origen, Apogeo y Caída de la Dictadura Militar. Eudeba. Buenos Aires. 1985.
- **Yannuzzi, María de los Angeles.** Política y Dictadura: los partidos políticos y el Proceso de Reorganización Nacional. 1976-1982. Editorial Fundación Ross. Rosario. 1996.